



***MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE  
ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  
(EN COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE COLEGIO DE  
ABOGADOS DE CANTABRIA)***

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**CURSO ACADÉMICO 2019-2020**

**EL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO TRAS LA REFORMA OPERADA POR LA  
LEY ORGÁNICA 7/2015, DE 21 DE JULIO, POR LA QUE SE  
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL  
PODER JUDICIAL.**

**THE NEW ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS APPEAL  
FOLLOWING THE REFORM IMPLEMENTED BY THE  
ORGANIC LAW 7/2015, OF JULY 31<sup>TH</sup>, THAT MODIFY THE  
ORGANIC LAW 6/1985, OG JULY 1<sup>ST</sup>, OF THE JUDICIARY  
POWER.**

**AUTORA: Federica Costagliola**

**DIRECTORA: Ana Sánchez Lamelas**

## INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. LA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN TRAS LA REFORMA OPERADA POR LA L.O. 7/2015.....	6
3. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	19
3.1. LA FASE DE PREPARACIÓN DEL RECURSO.....	19
3.1.1. Los poderes atribuidos a los tribunales de instancia. ....	23
3.2. SOBRE LA ADMISIÓN, LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y LA POSTERIOR SENTENCIA.....	25
4. SOBRE LA RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS: LA <i>CONDITIO SINE QUA NON</i> DE LA “DOCTRINA DAÑOSA Y SUSCEPTIBLE DE EXTENSIÓN DE EFECTOS”. ....	28
5. SOBRE EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE JURISPRUDENCIA. COMPARACIÓN CON LA REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO. ....	32
SEGUNDA PARTE.....	37
6. LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS MÁS RELEVANTES ORIGINADOS POR LA REFORMA. (ANÁLISIS DE ALGUNOS AUTOS RELEVANTES).....	37
6.1. PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO TRANSITORIO.....	38
6.2. EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 89.2 f): EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE JURISPRUDENCIA. ....	42
6.3. EL <i>NUMERUS APERTUS</i> DE LOS SUPUESTOS DE “INTERES CASACIONAL OBJETIVO”. LOS REQUISITOS DE LAS “OTRAS CIRCUNSTANCIAS” DE INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO. ....	49
7. CONCLUSIONES. ....	54
8. BIBLIOGRAFÍA.....	57
9. ABREVIATURAS.....	60
10. ANEXOS.....	61

## 1. INTRODUCCIÓN.

Si tuviéramos que definir la función del recurso de casación diríamos que, esencialmente, se trata de una instancia destinada a evitar que tengan entrada en el ordenamiento jurídico y permanezcan en vigor todas aquellas resoluciones que de alguna forma contrasten con la legalidad vigente, o, que es lo mismo, cabría afirmar que este recurso tiene atribuida una función nomofiláctica.

Esta palabra, cuyo origen se encuentra en el griego antiguo, deriva a su vez de la unión de dos palabras: νόμος (léase: nomos) es decir ley, también en el sentido más amplio de ordenamiento jurídico y del verbo φυλάσσω (léase fiulasso) cuyo significado es él de “proteger con la mirada”.

La Ley Orgánica 7/2015<sup>1</sup> ha modificado la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, afectando con especial relevancia al recurso de casación en el orden contencioso-administrativo.

La reforma parece perseguir la finalidad de fortalecer la función de “garante de la uniformidad del ordenamiento jurídico” que se atribuye al Tribunal Supremo, toda vez que éste es el órgano que tiene encomendado el enjuiciamiento de los recursos de casación.

En efecto, el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015, en su apartado duodécimo, afirma textualmente que:

*“con la finalidad de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, la Ley opta por reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho”, y sigue diciendo que “con la finalidad de que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional.”*

Antes de entrar en el análisis del nuevo recurso de casación contencioso administrativo, conviene evidenciar las diferencias entre la nueva regulación y la anterior.

Para resaltar los puntos de ruptura entre la nueva y la antigua casación, es muy interesante

---

<sup>1</sup> L.O. 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Publicada en el B.O.E. n. 174 de 22 de julio de 2015.

la opinión del Magistrado Dimitry Berberoff Ayuda, Director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo<sup>2</sup>.

El nuevo modelo de casación, como más adelante se profundizará, contiene una regulación más abierta tanto al derecho estatal, permitiendo la entrada de materias antes excluidas de la casación, como al derecho de la Unión Europea.

En efecto, en la antigua regulación se impedía el acceso a la casación de todas aquellas resoluciones dictadas en primera o única instancia por los Juzgados de lo contencioso administrativo y en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia, con la salvedad obviamente de los escasos casos en los que el Alto Tribunal se pronunciaba por ejemplo a través de la vía del recurso en interés de la Ley.

La nueva regulación configura el recurso de casación como un recurso único mientras que antes de la reforma nos enfrentábamos con tres clases de recursos: el recurso de casación ordinario, cuyo conocimiento se atribuya al Tribunal Supremo; el recurso de casación para la unificación de doctrina, cuya competencia correspondía al TS o al TSJ según las sentencias enjuiciadas aplicaran normas de procedencia estatal o autonómica y finalmente el recurso de casación en interés de la Ley, en la doble vertiente estatal o autonómica, dependiendo de las normas que habían de aplicarse e interpretarse<sup>3</sup>.

Tras la reforma se ha implantado un único recurso de casación que habrá de ser resuelto por el TS o por el competente TSJ según se lamente una infracción de las normas de procedencia estatal o autonómica, ampliándose su objeto.

En efecto, se pueden ahora recurrir en casación también las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo contencioso administrativo, por los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de la Audiencia Nacional o por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

La ampliación, no obstante, es más bien teórica, a juicio de quien escribe, ya que las sentencias dictadas por los Juzgados y Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, a parte de la *conditio sine qua non* de la presencia de interés casacional objetivo, tendrán que contener también, conforme a lo dispuesto ex artículo 86.1 LJCA, una doctrina que se repunte gravemente dañosa para el interés general y que sea susceptible

---

<sup>2</sup> NAVARRO VEGA M.B.,.. “Recientes Reformas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Tirant lo blanch, Valencia, 2017, pp. 152-153.

<sup>3</sup> Antes de la reforma, los recursos de casación para la Unificación de Doctrina y en interés de la Ley se regulaban en los artículos 96 a 101 LJCA y más concretamente: en los artículos de 96 a 98 se regulaba el recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito estatal; en el artículo 99 el mismo recurso pero en ámbito autonómico; en el artículo 100 se regulaba el recurso de casación en interés de la Ley en ámbito estatal y finalmente en el artículo 101 se regulaba este mismo recurso en ámbito autonómico.

de extensión de efectos. Estos requisitos, serán objeto del estudio que se desarrollará a lo largo del presente trabajo.

No es baladí destacar que ya en el Informe explicativo y propuesta de anteproyecto de la Ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso administrativa<sup>4</sup>, llevado a cabo por la Comisión General de Codificación, Sección Especial para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa<sup>5</sup>, se ponía de manifiesto que:

*“Quedan fuera de la casación tanto las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, como las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Esto supone que son muchos los asuntos sobre los que pueden convivir criterios judiciales contradictorios o disonantes, sin posibilidad procesal de solución salvo el recurso extraordinario de casación en interés de ley (artículo 96 LJCA), si bien sólo para cuando la contradicción se produce entre Salas de lo Contencioso-Administrativo (nunca en relación con las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso). Desde luego, la mayoría de los asuntos de interés cotidiano para los ciudadanos, que se resuelven por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y no llegan al umbral cuantitativo para ser apelables (30.000 euros, conforme al vigente artículo 81.1 a) LJCA, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre) en forma alguna pueden llegar al Tribunal Supremo.”*<sup>6</sup>

En síntesis, cabe concluir que tras la reforma el Alto Tribunal ha visto potenciada su función de garante de la seguridad jurídica, ex artículo 9.3 CE<sup>7</sup>, de acuerdo con su posición constitucionalmente reconocida de “*órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales*”, ex artículo 123.1 CE.

En la regulación anterior el papel de la casación encajaba en mayor proporción en el defensor del llamado *Ius litigatoris*. Tradicionalmente, ya a partir del derecho romano, se

<sup>4</sup> Publicado en Marzo de 2013 por el Ministerio de Justicia.

<sup>5</sup> La sección está compuesta por: el Presidente Francisco Velasco Caballero, el Secretario Julio Fuentes Gómez, el Grupo de Estudio de la sección integrado por: Silvia Díez Sastre, Gabriel Doménech Pascual, María Hernando Rydings y Francesc Rodríguez Pontón y finalmente los demás miembros: José María Baño León, Ana Bosch Jiménez, Núria Cleries Nerin, Diego Córdoba Castroverde, Alejandra Frías López,<sup>[L]</sup><sup>[SEP]</sup> Juan Carlos González Barral, Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Fernando Irurzun Montoro, Jesús López-Medel Báscones y Elisenda Malaret i García.

<sup>6</sup> p. 64 del Informe mencionado.

<sup>7</sup> Art.9.3 CE “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

solía contraponer el *Ius litigatoris*, relativo a la definición del caso concreto en el interés de las partes, al más noble *Ius constitutionis* que se identifica concretamente con la función nomofilática a la que se ha hecho referencia al principio de esta exposición.<sup>8</sup>

Esta perspectiva de una función del TS encaminada hacia el *ius litigatoris* está respaldada por el hecho de que en efecto ni la cuantía de la casación ni los motivos de la misma, es decir una infracción del derecho estatal o europeo, aseguraban que fueran resueltos por el Alto Tribunal asuntos que revistieran un interés objetivo para la comunidad jurídica.

La misma Comisión de Codificación en el informe anteriormente citado afirmaba que:

*“La Sección ha concluido que la configuración legal actual de la casación es ineficiente: destina recursos económicos a litigios que ya han obtenido una primera resolución judicial por parte de un órgano judicial colegiado y, en cambio, carece de verdadera eficacia para evitar o disuadir de nuevos procesos sobre las materias ya enjuiciadas por el Tribunal. A partir de aquí, la Sección propone la ampliación material y la objetivación de la casación. Se trata de permitir que la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo (y por extensión, las correspondientes Salas de los Tribunales Superiores de Justicia en relación con el Derecho autonómico) gocen de la facultad de seleccionar los asuntos admisibles, en virtud de su interés casacional objetivo. Esto es, en función de la conveniencia para la comunidad jurídica de que el Tribunal se pronuncie de forma temprana sobre la interpretación de una norma.”*<sup>9</sup>

Estas exigencias de ampliación material y objetivación de la Casación ya advertidas por la Comisión e incluso por algunos magistrados<sup>10</sup>, han tenido eco, como se verá a lo largo

---

<sup>8</sup>La primera distinción entre *Ius Constitutionis* e *Ius Litigatoris* se encuentra en el Digesto de Giustiniano (DIGESTO, 49.8.1.2) en el que se afirma lo siguiente: “*Contra constitutiones autem iudicatur, cum de iure constitutionis, non de iure litigatoris pronuntiatur; quo casu appellatio necessaria est*”.

<sup>9</sup> Informe del Ministerio de Justicia, pag. 68.

<sup>10</sup> No se puede prescindir de la referencia a la opinión del magistrado Diego Córdoba Castroverde, que afirma que “*En el recurso de casación diseñado por la Ley 29/1998, antes de la modificación ahora comentada, la admisión dependía del cumplimiento de unos presupuestos objetivos legalmente establecidos (por razón de la cuantía y por el órgano jurisdiccional del que procede la sentencia). Poco importaba el interés del asunto desde una perspectiva general, al margen del que naturalmente ostenta el recurrente, por lo que no era necesario argumentar si el pronunciamiento del Tribunal Supremo era útil para la sociedad y para la comunidad jurídica, bastaba con cumplir los pre- supuestos objetivos para tener acceso a la casación. Ello nos situaba ante un recurso de casación diseñado para tutelar intereses subjetivos concretos (ius litigatoris), al margen de su trascendencia jurídica objetiva y de la utilidad que la decisión pudiese tener para crear pautas interpretativas del ordenamiento jurídico aplicables en otros supuestos. Se trataba, en realidad, de una última instancia en la que poder obtener satisfacción de una pretensión subjetiva*”. NAVARRO VEGA M.B.,.. “Recientes Reformas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Tirant lo blanch, Valencia, 2017, pp. 22-23.

del trabajo, en la reforma de 2015.

Tras haber hecho un primer análisis sintético de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015 resulta fundamental entrar a partir de este momento en el vivo de la materia. El nuevo recurso de casación, como se ha dicho, ha dejado de ser un instrumento enfocado a la satisfacción de intereses subjetivos para pasar a ser un medio en el que la función nomofiláctica tiene su máxima expresión.

Habrà de hacerse una referencia a la tramitación y a los requisitos de admisión del mismo y finalmente, antes de pasar a los problemas que se están manifestando en la práctica, centrarnos en el análisis sobre el “*interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia*”, eje central de la reforma.

Si bien son muchos los problemas que plantea también la casación en ámbito autonómico, el estudio desarrollado en este trabajo se ceñirá exclusivamente al nuevo régimen del recurso de casación en ámbito estatal.

## **PRIMERA PARTE**

### **2. LA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN TRAS LA REFORMA OPERADA POR LA L.O. 7/2015.**

Como se ha anticipado, la disposición final tercera de la L.O. 7/2015 modifica la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, aportando unos cambios significativos a la regulación del recurso de casación.

Por lo que afecta al recurso de casación estatal, objeto de estudio de este trabajo, la Ley prevé una diferente redacción de la sección tercera, del capítulo tercero, del título cuarto, integrada por los artículos de 86 a 93 relativos al recurso de casación “común” ( el único que en efecto permanece en vigor tras la reforma) se suprimen los artículos 94 y 95 de la misma sección, el primero relativo a la formalización del escrito de oposición, a la eventual celebración de la vista y al plazo para dictar sentencia; el segundo en el que se regula la sentencia que ha de ser dictada por el Alto Tribunal.

Finalmente se suprimen las secciones cuarta y quinta del capítulo tercero, del título cuarto, integradas por los artículos de 96 a 101 que regulan el recurso de casación para la unificación de doctrina en su modalidad estatal o autonómica (artículos 96 a 99) y el recurso de casación en Interés de la Ley también en la doble vertiente estatal o autonómica (artículos 100 a 101).

Antes de ahondar en el análisis de la tramitación del nuevo recurso de casación, es preciso hacer una panorámica de las modificaciones concretas que la L.O. 7/2015 ha aportado a la Ley 29/1998, analizando las más relevantes,<sup>11</sup> confrontando la redacción de los preceptos modificados por la reforma.

A) En cuanto al artículo 86, efectuando una comparación entre la nueva y la anterior redacción de la disposición cabe destacar, en primer lugar, que de acuerdo con la exigencia de ampliar el objeto del recurso de casación a la que anteriormente se ha hecho referencia, se introduce la posibilidad de recurrir en casación también las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso administrativo y las dictadas en apelación por las Salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia.

Llama la atención la falta de referencia a las sentencias dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso, quizás por un olvido del legislador, aunque no quepan dudas sobre la recurribilidad de éstas últimas en casación.

Se añade en el primer apartado una *conditio sine qua non* en relación con las sentencias de los juzgados: estas en efecto, serán recurribles solo si contienen doctrina gravemente dañosa para el interés general y sean susceptibles de extensión de efectos.

En cuanto al alcance de esta expresión nos remitimos ahora al epígrafe 4 dedicado al análisis de los requisitos de la nueva casación en relación con las sentencias de los Juzgados.

Ha de subrayarse además que, como ya se ha dicho, se amplían las materias del recurso puesto que el apartado 2 del nuevo artículo 86 exclusivamente niega la recurribilidad de las sentencias recaídas en el marco del procedimiento especial para la protección del derecho fundamental de reunión ex artículo 122 LJCA y las dictadas en materia electoral. Se suprime entonces tanto la referencia a las sentencias a las que hacía referencia el antiguo apartado 2 a), esto es, las dictadas en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas, como evidentemente la referencia a las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros.

Además se elimina la recurribilidad en todo caso de las sentencias que ex art.86.3 declaren nula o conforme a derecho una disposición de carácter general. En relación con éstas

---

<sup>11</sup> Para la redacción de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la reforma de 2015, véase el B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998. Para la redacción de la misma tras la reforma véase el B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998 en su versión actualizada y consolidada.



últimas, conforme a lo dispuesto en el nuevo artículo 88.2 g), su recurribilidad se condicionará a la apreciación del interés casacional objetivo.

El apartado 3 del nuevo artículo 86 regula el recurso de casación en el ámbito autonómico, cuyo análisis excede del objeto del trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de evidenciar que, en efecto, en el nuevo régimen del recurso de casación, la regulación de la casación autonómica es muy escueta. Únicamente se hace referencia en este apartado a la composición de la Sección de la Sala del TSJ competente para resolver los recursos de casación. Se dejan abiertos, por lo tanto, muchos interrogantes, que solo la aplicación práctica de los Tribunales permitirá resolver.

B) Muy poco hay que decir sobre las modificaciones del artículo 87 ya que la nueva redacción reproduce casi de forma literal lo dispuesto en la anterior.

Es curioso que la reproducción literal llegue hasta el punto de mantener la expresión “*recurso de súplica*”, sustituida ya hace 8 años por la Ley 13/2009<sup>12</sup> por la de “*recurso de reposición*”<sup>13</sup>.

Pese a lo que se acaba de decir, de acuerdo con la opinión de SANTAMARÍA PASTOR<sup>14</sup>, el cambio de redacción es afortunado ya que queda claro que no son recurribles los autos dictados en los procesos para la protección del derecho fundamental de reunión y los dictados en materia electoral y además que en los recursos contra autos sigue siendo exigible el juicio de relevancia ex artículo 86.3 LJCA.

Sin embargo, el autor sigue afirmando que “*la fortuna se detiene en el nivel de la redacción, porque lo que no tiene sentido alguno es el mantenimiento del citado juicio de relevancia en los recursos contra autos: los motivos de ilegalidad que pueden esgrimirse contra los enumerados en las cinco letras de este artículo 87.1 son- en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos- infracciones de la propia Ley de lo Contencioso, norma perteneciente indiscutiblemente al ordenamiento estatal*”. Por todo lo dicho, el juicio de relevancia se convertiría en una mera formalidad.

Finalmente, se elimina la recurribilidad en todo caso de los autos dictados en aplicación de los artículos 110 y 111 LCA, quedando éstos últimos sometidos como los demás al

<sup>12</sup> Ley 3/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

<sup>13</sup> Modificación aportada por el artículo 67 de la Ley 13/2009 que introdujo la disposición adicional octava a la Ley 29/98, cuyo tenor literal es el siguiente: “*Las referencias hechas en el articulado de esta Ley al recurso de súplica se entenderán hechas al recurso de reposición.*”

<sup>14</sup> SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Una primera aproximación al nuevo sistema casacional, Revista de Administración Pública n. 198 septiembre- diciembre 2015, Madrid.

juicio de relevancia: juicio que al igual que en el caso anterior se revela puramente formal ya que los recursos se fundamentarán siempre en la vulneración de los mismos artículos 110 y 111 LJCA.

C) Cabe destacar que se añade a la LJCA el artículo 87 bis, en el que se pone de manifiesto algo que realmente va implícito en el potenciamiento de la función nomofiláctica del recurso de casación: la exclusión del mismo de las cuestiones de hecho.

Aparece *ictu oculi* el hecho que la casación no es en ningún caso una tercera instancia, pues se dejan de lado las cuestiones de *ius litigatoris* para centrarse en las de *ius constitutionis*, aunque con matices, como explicaremos.

El segundo apartado se dedica a las pretensiones de las partes que pueden ser la anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado, con la consecuente devolución de los autos al Tribunal de instancia o, en su caso, la resolución del pleito por parte del TS.

El último apartado permite al Alto Tribunal la adopción de acuerdos para establecer pautas relativas a la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos de oposición e interposición.

Se volverá más adelante sobre el análisis específica de estos acuerdos, de momento basta con decir que el TS ha adoptado al amparo de esta previsión normativa el acuerdo de 20 de abril de 2016<sup>15</sup>.

D) Incluso tras una primera y superficial lectura del artículo 88 en ambas redacciones (antes y post-reforma) parece evidente la enorme diferencia existente entre las dos previsiones normativas.

Mientras la primera redacción consideraba como motivos de recurribilidad de una resolución los tradicionales (abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, incompetencia o inadecuación del procedimiento, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales siempre que se haya producido indefensión y finalmente infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate), la nueva redacción cambia completamente la sistemática del recurso de casación de manera que la reforma pivota sobre el concepto de interés casacional objetivo. Éste último será objeto de estudio

---

<sup>15</sup> Publicado en el B.O.E. n.162 de 2 de julio de 2016.

en el epígrafe 5 al que ahora nos remitimos.

De momento ha de destacarse que la reforma establece un sistema de admisión que se basa en un sistema de presunciones. En un primer análisis superficial puede parecer que el artículo 88 establece un sistema basado en un doble nivel de presunción: por un lado *iuris tantum* para los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 88, que se desprende del hecho que se prevea que el Tribunal “podrá apreciar” la existencia de interés casacional objetivo (ha de subrayarse además que estos supuestos no constituyen un *numerus clausus* ya que la norma expresamente hace referencia al hecho que éstos sean solo una parte “entre otras circunstancias”); por otro lado *iuris et de iure* en los casos del apartado 3 del artículo 88 en el que se dice que “se presumirá que existe” interés casacional objetivo, poniendo de manifiesto *prima facie* que la admisión parece ser imperativa.

En realidad, siguiendo con la lectura del precepto, nos encontramos con la salvedad establecida por el apartado do 3 *in fine* según el cual en los supuestos recogidos en las letras a), d) y e) a los que ha de añadirse evidentemente el supuesto contenido en la letra c) el recurso se podrá inadmitir por auto motivado si el Tribunal aprecia la carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Todo lo dicho lleva entonces a la conclusión de que en un único caso la presunción de la existencia de interés casacional objetivo se constituye como verdaderamente *iuris et de iure*, esto es en el supuesto ex artículo 88.3 b), cuando la resolución recurrida se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente considerándola errónea.

En síntesis, podríamos afirmar que la reforma ha establecido un sistema de admisión del recurso de casación cuasi-discrecional, dejando amplio margen de maniobra al TS, de acuerdo también con la opinión de VELASCO CABALLERO<sup>16</sup>, que considera que frente a la tradicional admisión configurada como tarea subsuntiva, la nueva configuración legal es, al menos en parte, tarea distinta por no establecer parámetros normativos de referencia para la apreciación del interés casacional objetivo. Este autor además afirma que en estos casos “*la clave de la regulación se desplaza hacia la composición de los órganos y la*

---

<sup>16</sup> VELASCO CABALLERO, F., Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa, Revista Española de Derecho Administrativo ( REDA ) , núm. 182 enero-marzo de 2017 pp. 161 y ss.

*definición de los procedimientos a través de los cuales se han de adoptar sus decisiones. Esto es, allí donde la ley no dice el <<que>>, lo importante de la regulación pasa a ser el <<quien>> y el <<como>>. [...] tal regulación no es sustantiva sino básicamente organizativa”<sup>17</sup>. Por lo tanto, la clave en la regulación de la admisión ha de buscarse en la regulación de la Sección de la Sala que decide sobre la admisión, que, como enseguida se verá, se regula ex artículo 90.2.*

En cuanto al análisis específico de los supuestos previstos ex artículo 88, no reviste especial utilidad comentar todos y cada uno de ellos, pero sí conviene destacar las cuestiones más relevantes.

En cuanto al supuesto de la letra a) la referencia es a los casos de resoluciones contradictorias que parecen hacerse eco de lo dispuesto en el derogado artículo 96 sobre el recurso para la unificación de doctrina<sup>18</sup>. Ha de tenerse en cuenta que, como sostiene TOLOSA TRIBIÑO<sup>19</sup>, lo determinante en este caso será la identidad de cuestiones jurídicas en relación con las que se alcanzaron conclusiones contradictorias respecto a las normas en las que se fundan las sentencias.

La letra b) del artículo 88.2 también en un cierto sentido retoma la anterior regulación de la casación en interés de la Ley ex artículo 100 LJCA ya que “la doctrina gravemente dañosa para los intereses generales” constituía el eje central de este último recurso. Sin embargo en la nueva regulación desaparecen las limitaciones relativas a la legitimación privilegiada de algunos recurrentes para la impugnación.<sup>20</sup>

El supuesto regulado en la letra d) parece dirigido, como afirma TOLOSA TRIBIÑO<sup>21</sup> recogiendo las palabras de LOZANO CUTANDA, “a corregir la doctrina del Tribunal

<sup>17</sup> VELASCO CABALLERO, F., ob. cit. p. 162.

<sup>18</sup> Esta disposición, efectivamente, hacía referencia a “pronunciamientos distintos” a los que se hubiera llegado no obstante los litigantes sean los mismos o se encuentren en idéntica situación en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

<sup>19</sup> NAVARRO VEGA M.B., “Recientes Reformas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Tirant lo blanch, Valencia, 2017 pp. 34 y ss.

<sup>20</sup> El derogado artículo 100 LJCA preveía de hecho que solo algunos recurrentes “privilegiados” (esto es la Administración Pública territorial que ostente interés legítimo en el asunto, Entidades o Corporaciones que ostenten representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo y tuvieran interés legítimo en el asunto, el Ministerio Fiscal y la Administración General del Estado), pudieran impugnar en interés de la Ley las sentencias contenientes doctrina errónea y gravemente dañosa para el interés general dictadas en única instancia por los Juzgados de lo contencioso y las dictadas por TSJ y AN.

<sup>21</sup> NAVARRO VEGA M.B., ob. cit. p. 35.

*Constitucional en virtud de la cual la decisión de suscitar la cuestión de inconstitucionalidad «es una prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano judicial» (STC 129/2013) “*

En relación con el listado contenido en el apartado 3 del art 88, merece la pena destacar que la letra a) contiene una referencia a los supuestos cuyo interés casacional objetivo deriva del hecho que en la resolución impugnada se hayan aplicado normas que carecen de interpretación jurisprudencial. Este precepto, fomenta la formación de jurisprudencia para las normas de nueva creación, constituyendo un importante paso hacia la eliminación de la inseguridad jurídica.

En cuanto a lo dispuesto por la letra b) del artículo 88.3 ya se ha evidenciado cómo representa en realidad el único supuesto de presunción *iuris et de iure*, como de hecho destaca también TOLOSA TRIBIÑO<sup>22</sup> que afirma tratarse en este caso de “*resoluciones “rebeldes”, contrarias a reiterada jurisprudencia: en caso de que una resolución se aparte deliberadamente de la tendencia jurisprudencial en una determinada materia, la misma tendrá entrada directa a las manos del Alto Tribunal, no pudiendo acordarse su inadmisión en ninguna circunstancia”*.

En la letra c) del artículo 88.3 se hace referencia a la declaración de nulidad de una disposición de carácter general. Este supuesto, como anteriormente se ha dicho, contiene una expresa salvedad respecto a la presunción de interés casacional objetivo: se excluyen como es lógico, todas aquellas resoluciones que no tengan suficiente trascendencia.

La letra d) del artículo 88.3 se refiere a una serie de supuestos que se caracterizan por la especialidad del órgano que ha dictado los actos o disposiciones en los que se funda la resolución objeto del recurso: los organismos reguladores o de supervisión, o las agencias estatales siempre que la competencia para su enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Contencioso de la AN. Según SANTAMARÍA PASTOR<sup>23</sup> la referencia que esta letra hace a las agencias estatales está en realidad “fuera de lugar”, pues la competencia para conocer de sus actos no corresponde a la AN sino a los Juzgados Centrales ex artículo 9.1

---

<sup>22</sup> NAVARRO VEGA M.B.,... ob. cit. pp. 35 y 36.

<sup>23</sup> SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Una primera aproximación al nuevo sistema casacional, Revista de Administración Pública, núm. 198 septiembre diciembre 2015, Madrid p. 24.

c) LJCA<sup>24</sup>

En cuanto a la letra e) la *ratio essendi* de la previsión normativa parece ser la de otorgar, al igual que para los actos emanados por el Consejo de Ministros, la presunción de la presencia de interés casacional objetivo, a los dictados por los Gobiernos Autonómicos.

E) A juicio de quien escribe no es ese el lugar oportuno en el que realizar el análisis de lo dispuesto ex art.89 LJCA, que regula el escrito de preparación del recurso. Su contenido habrá de ser profundizado en el marco del análisis de la tramitación del recurso, dedicándose unos epígrafes específicos tanto al escrito de preparación como al de interposición. Lo que si merece la pena subrayar a estas alturas es que se puede apreciar cómo en la nueva redacción se regula mucho más detalladamente el contenido de este escrito respecto a la anterior que, de manera muy escueta, simplemente decía que en éste tenía que manifestarse la intención de interponer el recurso, mediante una sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos.

Llama la atención que tras la reforma se elimine toda referencia a la exigencia de exponer de manera sucinta o sintética, casi a poner de manifiesto la importancia de este escrito en el que como se verá la parte tiene que desplegar todos los medios de los que dispone. Esta importancia parece ser aún más potenciada por el hecho que mientras en la regulación anterior el plazo para presentar el escrito de preparación ante el Tribunal de instancia era de 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución impugnada, en la actual redacción el plazo se amplía a 30 días computados como en el caso anterior.

Ha de destacarse además lo dispuesto ex 89 apartado 5 *in fine*: se otorga al Juez *a quo* la facultad de emitir mediante una resolución una opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia. Ha de matizarse, no obstante, que pese a que literalmente la disposición normativa hable de “Sala”, término que en

---

<sup>24</sup> de hecho el artículo 9.1 c LJCA dispone que serán competentes los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo para conocer de los recursos frente a : “*las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del artículo 10*”.

puridad es referible única y exclusivamente a los TSJ y a la AN, en realidad esta expresión ha de interpretarse de manera expansiva, incluyendo por ende todo Juez *a quo*. No tiene sentido, de hecho, que se admita la recurribilidad de las resoluciones de los Juzgados y Juzgados Centrales de lo contencioso, y sin embargo se consideren estos últimos como “órganos menos importantes” privándoles de una facultad que en cambio se reconoce a las Salas. La falta de referencia expresas a los Juzgados, ha de atribuirse, con mucha probabilidad, a un olvido del legislador, uno más que se añade a los que hasta ahora se han detectado.

Finalmente no podemos dejar de destacar que de acuerdo con este precepto el recurso puede ser interpuesto por los que hayan sido parte en el proceso en el que haya recaído la resolución recurrida o deberían haberlo sido. Esta última previsión puede plantear algunos problemas. Si bien no caben dudas en relación con la legitimación de quien no fue emplazado en la instancia y ostente un interés legítimo en el proceso, más problemática es la legitimación de quien fue emplazado en el proceso de instancia y voluntariamente no se personó. Si éste se persona dentro del plazo de 30 días computados desde la última notificación a las de la resolución que se pretende recurrir cabe preguntarse si estaría legitimado.

El TS en la STS de 18 de Junio de 2001<sup>25</sup>, evidentemente antes de la reforma, parecía reconocer dicha legitimación, pero actualmente ha de tenerse en cuenta que en el Documento de trabajo de la Sala Tercera del TS sobre los “problemas interpretativos de la nueva regulación de la casación contencioso administrativa”<sup>26</sup> se excluye la legitimación de quien fue emplazado y no se personó en la instancia. Por lo tanto, dicha previsión ha de ser interpretada restrictivamente.

F) Lo primero que ha de destacarse a la vista del artículo 90 es el cambio en la sistemática de la Ley llevado a cabo por la reforma. El antiguo artículo 90, de hecho, regulaba las

---

<sup>25</sup> STS 5183/2001 ( sección 4) de 18 de junio de 2001, n. Recurso 1500/1997 FD. segundo en el que la Sala reconoce “la legitimación para recurrir a quienes hubiesen podido actuar como parte demandada en la instancia y se personen antes de transcurrir el plazo para la preparación del recurso, computado éste desde la última notificación de la sentencia hecha a las partes; y, asimismo, quienes hubiesen podido actuar como parte demandada (también como coadyuvante) y no fuera debidamente emplazada en la instancia.”

<sup>26</sup> Puede leerse el documento integral en el enlace:

[http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/20.\\_documento\\_de\\_trabajo\\_\\_t.s\\_\\_2016\\_\\_documento\\_no\\_20.pdf](http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/20._documento_de_trabajo__t.s__2016__documento_no_20.pdf)

consecuencias de la presentación del escrito de preparación: que se tuviera por preparado por el Secretario Judicial en el caso del cumplimiento de los requisitos legales, emplazando en consecuencia a las partes para su comparecencia e interposición del recurso ante el TS; o que en cambio se tuviera por no preparado, mediante auto motivado del Tribunal de instancia en el caso de incumplimiento de los mismos. En la actual regulación, en cambio, estos aspectos se regulan en los apartados 3 a 6 del antes mencionado artículo 89 LJCA que como se ha dicho, regula el escrito de preparación *tout court* incluyendo también sus consecuencias.

La nueva previsión del artículo 90 se dedica en cambio al emplazamiento de las partes ante el TS una vez tenido por preparado el recurso. De esta disposición ha de destacarse que la forma de la resolución adoptada por el TS difiere según se considere existente o no el interés casacional objetivo y por ende admitido o no el recurso: en el primer caso la resolución adoptará la forma de auto motivado, en el segundo de providencia. Sin embargo tanto si el Juez *a quo* ha utilizado la facultad otorgada ex artículo 89. 5 LJCA expresando opinión favorable a la admisión del recurso, como en el caso en el que se alegue la concurrencia de uno de los supuestos ex artículo 88.3, la resolución de inadmisión se efectuará mediante auto motivado. Además, los autos de admisión del recurso se publicarán en la web del TS.

Merece la pena detenerse sobre lo dispuesto por el apartado 2 de este precepto, que regula la composición de la Sección de la Sala del TS a la que se encomienda la decisión sobre la admisión a trámite del recurso. Si bien podría parecer no tener mayor importancia, en realidad la regulación de la composición de esta Sección resulta elemento esencial si, como se ha dicho anteriormente, se comparte la opinión de que la clave de la interpretación de la reforma está constituida por la composición de los órganos y de los procedimientos de adopción de las decisiones sobre los mismos<sup>27</sup>.

Esta “Sección de admisión” está integrada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso y al menos un magistrado de cada una de las secciones que componen la Sala. Estos últimos se renovarán, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del TS, por mitad cada seis meses (salvo tras su primera constitución ya que en este supuesto se prevé la

---

<sup>27</sup> Véase el comentario al artículo 88 LJCA.



renovación después de un año). Quien escribe, compartiendo una vez más la opinión de VELASCO CABALLERO <sup>28</sup> entiende que la lógica consecuencia de esta regla organizativa sea que en la Sección de admisión siempre estará presente un experto en la materia objeto de la resolución recurrida, ya que en todo caso habrá un magistrado de cada sección de la Sala.

En el Acuerdo de la Sala de Gobierno del TS<sup>29</sup> que desarrolla el contenido de lo dispuesto en el 90.2 LJCA se dice que esta composición de la Sección “*garantiza una participación amplia de los componentes de la Sala en la determinación del interés casacional objetivo en la formación de jurisprudencia*”<sup>30</sup>. La regulación parece confirmar el que VELASCO CABALLERO denomina “criterio experto”, esto es, el hecho de que sobre cada tipo de asunto tenga mayor peso la opinión del “magistrado experto”, es decir, el integrante de la sección especializada en la materia objeto del recurso. No parece erróneo decir que en efecto este magistrado, conoce con más profundidad la materia, a fin de evaluar la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala sobre la misma.

El Acuerdo antes mencionado, prevé que en el marco de la Sección primera, esto es, la Sección de admisión, “*Los recursos de casación se turnarán a los Magistrados/as de las diferentes Secciones en función de las Normas de Reparto aprobadas para las Secciones Segunda a Quinta, de manera que cada uno conozca, preferentemente, en trámite de admisión de los recursos de casación que corresponda a su Sección de procedencia.*”<sup>31</sup> Sin embargo, este criterio está mitigado por la facultad que el Presidente de la Sala tiene de alterar la distribución de asuntos para una distribución equitativa entre los ponentes. La ventaja de este sistema de composición de la Sección junto con el hecho que los magistrados permanecen en la misma por un tiempo muy limitado, es evitar que cada uno de ellos proyecte en la sección sus convenciones y prejuicios impidiendo una evolución de la jurisprudencia.

Quien escribe no comparte la opinión del autor mencionado<sup>32</sup>, según la cual esta composición de la sección también podría implicar que la mayoría de los magistrados no

---

<sup>28</sup> VELASCO CABALLERO F., ob cit. pp. 162 y ss.

<sup>29</sup> Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2016, publicado en el B.O.E. núm.163 de 7 de julio p. 47747.

<sup>30</sup> Acuerdo citado en la nota anterior, p. 2 exposición de motivos).

<sup>31</sup> Acuerdo citado en la nota 27, p. 6.

<sup>32</sup> VELASCO CABALLERO, F. ob cit. p. 164.

expertos impongan criterios de interés casacional objetivo a los magistrados expertos. En efecto, parecería un sinsentido que el propio Tribunal estableciera que la regla general sea atribuir la ponencia al magistrado experto y que en la práctica su opinión fuera sustancialmente inútil. Si lo que se quería era no dotar de importancia alguna a la opinión de este magistrado, posiblemente se habría establecido una atribución casual y relacionada con el número de asuntos para cada ponente, regla que en la actual regulación es solo residual, constituyendo una mera facultad del Presidente que, téngase en cuenta “podrá ser matizada” y no “se matizará” (en todo caso). Es decir, el Presidente, si lo estima oportuno, puede, pero no debe imperativamente, alterar la distribución de ponencias.

G) La reforma poco ha incidido sobre el artículo 91. De hecho, el único cambio que puede apreciarse se encuentra en el apartado 4, en el que se elimina la referencia a la AN y al TSJ en relación con la preparación del recurso y se dispone que será el Letrado de la administración de justicia (esta vez, además, sustituyendo correctamente la anterior denominación de Secretario Judicial), el que una vez tenido por preparado el recurso dejará testimonio de los autos y de la resolución recurrida.

H) En cuanto al artículo 92, si bien ambas redacciones del mismo pivotan sobre la personación de las partes ante la Sala del TS, es evidente cómo la actual disposición se hace eco del núcleo de la reforma de la Ley de la jurisdicción, esto es del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, regulando minuciosamente, a tal efecto, el escrito de interposición del recurso.

Dispone este precepto que el escrito de interposición, deberá explicar las razones por las que se consideran infringidas las normas o la jurisprudencia que en su momento se identificaron en el escrito de preparación: estas y no otras, poniendo de manifiesto, una vez más, que el momento en el que la parte tiene que utilizar todas sus armas es el de la presentación del escrito de preparación, ya que no será posible corregir eventuales olvidos, faltas o errores en el sucesivo escrito de interposición.

Éste, *prima facie*, parece ser una repetición ligeramente más profundizada del escrito anterior. Curiosamente, el legislador prevé para este escrito un plazo inferior al de preparación. En efecto, si bien para ambos se prevé un plazo de 30 días, en el caso del

escrito de interposición, se computan a partir del mismo día de la notificación de la diligencia de ordenación que ordena remitir las actuaciones a la Sala del TS.

También ha de destacarse que en esta misma disposición normativa se regula la posibilidad de vista pública o votación y fallo ante el Pleno de la Sala, si la índole del asunto lo aconseja.

I) Finalmente, (ya que la reforma ha implicado la supresión, además de los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de la Ley, de los artículos 94 y 95 LJCA) en relación con el artículo 93, ha de destacarse que una vez más, un cambio en la sistemática de la Ley, ya que la actual redacción del precepto regula la sentencia mientras que en la anterior redacción, la regulación de la misma se recogía en el artículo 95. De esta previsión normativa, ha de evidenciarse una contradicción del legislador.

A la hora de analizar las previsiones normativas relativas a los escritos de preparación e interposición se ha evidenciado cómo a la parte se le haya puesto un estrecho corsé puesto que solo tiene la posibilidad de rebatir las infracciones supuestamente cometidas por el juez *a quo* en el escrito de preparación mientras que en el escrito de interposición se limitará al análisis de las mismas. Pero la pregunta surge espontánea: ¿qué sentido tiene obligar a la parte a analizar en el primer escrito todas las infracciones y a repetirlas en el segundo si, finalmente, se prevé que la Sala podrá resolver conforme a todas las normas y jurisprudencia que fueran aplicables al asunto aun cuando las partes no hayan hecho expresa referencia a ellas?

A juicio de quien escribe la respuesta, una vez más, ha de encontrarse en la voluntad del legislador de ir hacia una regulación de la casación como máxima representación del *ius constitutionis* potenciando por ende su función nomofiláctica. Parece bastante lógico, si nos situamos en esta óptica, prever que también y sobretodo en este caso, el juez *ad quem* pueda, o más bien tenga, que hacer uso de una de las facultades que se le atribuye por un principio general del derecho: *iura novit curia*. El Juez sabe el derecho y por lo tanto tiene que aplicarlo pese a lo que digan las partes, sobretodo si como ocurre en este caso, la finalidad es proteger la integridad y la uniforme interpretación del ordenamiento jurídico.

L) Si bien las costas se regulan en el artículo 139 LJCA, que no se integra propiamente en las disposiciones relativas al recurso de casación, huelga decir que la reforma ha introducido una modificación en relación con la regla del vencimiento objetivo de manera que ya no se le imponen las costas a la parte cuyas pretensiones se rechazan, sino se prevé por regla general que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por la mitad salvo que se aprecie que una de ellas haya actuado con mala fe o temeridad. En este último caso se le impondrán las costas, pudiéndose además limitar a una parte de ellas, o hasta una cifra máxima.

### **3. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.**

En realidad, la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015 no introduce cambios significativos en la tramitación del recurso de casación, cuyas fases esenciales siguen siendo: preparación, admisión, interposición, oposición (en su caso) y sentencia. Esta última, se regula en el artículo 93 LJCA, cuyos aspectos más relevantes se han puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, a cuya lectura se reenvía para evitar inútiles repeticiones.

Pese a todo lo dicho, las innovaciones de detalle son muchas y de no marginal importancia. Muy interesantes resultan los cambios aportados a las fases de preparación, admisión del recurso e interposición, sobre los que se centraran los epígrafes que siguen.

#### **3.1. LA FASE DE PREPARACIÓN DEL RECURSO**

De entrada, de acuerdo con la opinión de SANTAMARÍA PASTOR<sup>33</sup>, el mantenimiento que la reforma hace de este trámite ha de considerarse incomprensible. No es baladí subrayar que, en el informe explicativo hecho por la Sección especial para la reforma de la LJCA de la Comisión General Codificadora en 2013, al que anteriormente se ha hecho referencia, se propone una nueva regulación de la casación<sup>34</sup> en la que, “*se simplifica su tramitación. En especial, se suprime el actual régimen de preparación del recurso ante el órgano que dictó la sentencia recurrida (artículos 89 a 92 LJCA), y se atribuye al propio Tribunal Supremo (o Tribunal Superior de Justicia) la tramitación plena del trámite de admisión (nuevo artículo 89 LJCA).*” Sin embargo, el legislador parece no

---

<sup>33</sup> SANTAMARÍA PASTOR J.A., Una primera aproximación al nuevo sistema casacional, Revista Española de administración pública, núm. 198 septiembre diciembre 2015, p. 24.

<sup>34</sup> Informe citado, p. 73, letra g).

considerar estas exigencias de reforma y, por si fuera poco, incluso parece ir en dirección contraria, haciendo más abstrusa y compleja la regulación de este trámite, convirtiéndolo en un trámite esencial hasta llegar al punto de no considerar subsanables los incumplimientos de los requisitos formales requeridos ex artículo 89 LJCA<sup>35</sup>.

Frente a la denegación de la preparación por el juez de instancia solo se admite la interposición de un recurso de queja que de nada sirve para subsanar las eventuales deficiencias. Leyendo las primeras 5 letras del apartado 2 del artículo 89 que regula el contenido del escrito de preparación, se encuentra una clara confirmación de lo que se acaba de decir, pues sin dudas, estos requisitos contenidos en el precepto mencionado podrían o, mejor dicho, deberían, ser apreciados por el *juez a quo*. De hecho, en cuanto a los llamados “requisitos reglados” de la letra a) plazo, legitimación y recurribilidad, no cabe duda que el *juez a quo* se sitúa incluso en una posición privilegiada para su apreciación.

En cuanto a la letra b) lo que quizá se considera sobrante es el deber de la parte de “identificar con precisión” las normas o la jurisprudencia infringida, de cara al hecho que sucesivamente, una vez admitido a trámite el recurso, en la práctica, todo ha de repetirse en el escrito de interposición. Y, además, como ya se ha dicho anteriormente, téngase en cuenta que el TS sucesivamente puede ampliar el debate a todas las normas y jurisprudencia que considere oportunas y relevantes.

La letra c) contiene una previsión que no hace otra cosa que aumentar la litigiosidad. Decir, como hace el precepto, que en relación con los actos y garantías procesales ha de acreditarse que se produjo indefensión y que en instancia se pidió subsanación de haber existido momento oportuno para ello, equivale a exigir a las partes que interpongan en todo caso recurso de reposición cada vez que por ejemplo se le deniegue un medio de prueba. La paradoja es evidente: la parte muchas veces no sabe y no puede saber si la denegación de un medio de prueba puede producir indefensión. Imaginemos el caso en el que se deniegue una testifical por ser elevado el número de testigos que hayan de ser escuchados y resulte que en la realidad el testigo denegado conocía un particular relevante para el pleito que posteriormente se tuvo en cuenta en la sentencia. La parte, para tutelarse, deberá recurrir preventivamente la denegación de prueba pese a que en el

---

<sup>35</sup> En la misma línea, véase la opinión de MEDIAVILLA CABO J.V., en NAVARRO VEGA M.B., ob cit. pp.81 y ss.

momento en el que se produce su importancia aún no está clara.

El cuarto de los requisitos del artículo 89 regula el denominado juicio de relevancia, que se ha mantenido invariado tras la reforma.

La letra e) contiene, un grosero error por parte del legislador, puesto que sólo se afirma la necesidad de acreditar que la norma infringida forma parte del ordenamiento estatal o de la UE únicamente con referencia a las resoluciones dictadas por los TSJ. Es evidente que en la realidad también los Juzgados de lo Contencioso administrativo a menudo aplican normas autonómicas. Es lógico creer, interpretando extensivamente la disposición, que también en estos casos, también habrá de acreditarse la proveniencia estatal o comunitaria de las normas infringidas.

El último requisito es evidentemente el más relevante: acreditar la existencia del interés casacional objetivo, especialmente en referencia a los supuestos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA.

No puede omitirse finalmente una referencia a lo dispuesto por el Acuerdo de la Sala del TS de 20 de abril de 2016<sup>36</sup> sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales y especialmente al apartado III del mismo rubricado “*Criterios orientadores respecto de los escritos de preparación (artículo 89.2 de la LJ) y de oposición a la admisión (artículo 89.6 LJ) de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo*”. Este acuerdo parece contrastar todo lo dicho en relación con el escrito de preparación y sobre todo sobre su importancia. Si la parte en este escrito tiene que utilizar todas sus armas, no se entiende el sentido de establecer que el mismo solo pueda tener una extensión máxima de 35.000 caracteres con espacio, equivalentes a 15 folios, frente a los 50.000 caracteres con espacio, equivalentes a 25 folios del escrito de interposición. Se le pide al recurrente que releve todas y cada una de las infracciones, so pena de imposibilidad de subsanar las faltas en el escrito de interposición y que además lo haga de manera muy escueta, pues la petición de principio es evidente.

La Sala, no obstante, ha matizado que no cabe denegar sin más la preparación del recurso

---

<sup>36</sup> Acuerdo de la sala de Gobierno del TS pp. 4 y ss.

de casación por no haberse ajustado a dichos criterios.

Lo explica con claridad el ATS 13/11/2017 (RQ 445/2017), que concluye:

*“asiste la razón al recurrente cuando denuncia que la Sala de instancia ha realizado una interpretación rigorista de los presupuestos procesales, con un resultado desproporcionado, pues no puede anudarse la denegación de la preparación del recurso de casación al no seguimiento de unos criterios que se configuran como orientadores, máxime cuando el tribunal a quo no ha solicitado la subsanación prevista en el art. 138.2 LJCA otorgando un plazo de diez días para llevarla a cabo”.*

En el mismo sentido, dice el ATS 16/5/2018 (RQ 589/2017) que:

*“el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2016, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera de este Tribunal —publicado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de mayo de 2016 (BOE 162, de 6 de julio de 2016), tiene, al tratarse del escrito de preparación, carácter orientativo, a modo de una recomendación de buenas prácticas. No teniendo, pues, carácter vinculante, el hecho de que la parte que anuncia el recurso no lo siga no puede dar lugar, por sí solo, a la denegación de su preparación”*

En este sentido, coincidimos con lo señalado por PIÑAR MAÑAS<sup>37</sup> cuando afirma que *“cierto que la Sala de Gobierno se ampara en lo que dispone la LJ (art. 87.bis.3), pero también es cierto que, precisamente por esto, sólo se establece en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. No para la civil, penal, social o militar. Lo cual demuestra que no se trata de una verdadera necesidad procesal de alcance general, sino de un criterio “extrínseco” que debe moverse por tanto en ese ámbito formal y externo, pero no sustancial”.*

Recientemente, en el ATS de 25 de abril de 2019 (RQ 135/2019), ha puntualizado que en ningún caso la parte recurrente puede escudarse en la limitación de espacio para justificar

---

<sup>37</sup> PIÑAR MAÑAS, J.L. (2016): “Sobre la extensión máxima de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera del TS”. En Abogacía Española, 26 de mayo de 2016. <https://www.abogacia.es/2016/05/26/sobre-la-extension-maxima-de-los-escritos-procesales-referidos-al-recurso-de-casacion-ante-la-sala-tercera-del-ts/>.

la omisión o insuficiente fundamentación de algún apartado de los que el artículo 89.2 prescribe. La Sala lo expresa en estos términos:

*“El acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2016, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera de este Tribunal -publicado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de mayo de 2016 (BOE 162, de 6 de julio de 2016), tiene, en cuanto concierne al escrito de preparación, mero carácter orientativo, a modo de una recomendación de buenas prácticas (ATS de 16 de mayo de 2018, recurso nº 589/2017). No teniendo, pues, carácter vinculante, nada impedía a la parte sobrepasar la extensión recomendada en dicho acuerdo para el escrito de preparación, en la medida en que las circunstancias del caso lo hubieran exigido”.*

### **3.1.1. Los poderes atribuidos a los tribunales de instancia.**

*“Para que el TS pueda ejercer su función nomofiláctica o de protección de la norma a la que está llamado en la reforma, tiene que haber una fuerte barrera de gladiadores que actúe en funciones de contención desde la primera línea de fuego ante la avalancha de recursos que, cual marea negra, amenaza con inundar la sala tercera del Tribunal.”<sup>38</sup>*

Con estas palabras evocadoras y sin duda con mucho acierto, Clara Penín Alegre, Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cantabria, define la función del Juez *a quo* en el marco del nuevo recurso de casación.

El tribunal de instancia, tras la reforma, comparte con el TS la función de garante del ordenamiento jurídico, si bien situándose en un nivel inferior, ya que como más adelante se verá la decisión última e inopinable sobre la admisión es tarea específica del Alto Tribunal.

Conforme con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 89 LJCA, tanto si se tiene por preparado el recurso, como si se considera no preparado por incumplimiento de los requisitos legales, el juez *a quo*<sup>39</sup> ha de dictar auto motivado. En el primer caso motivando suficientemente la concurrencia de los requisitos y en el segundo motivando la falta de

<sup>38</sup> Penín Alegre, C., en NAVARRO VEGA M.B., ob cit. p. 117.

<sup>39</sup> una vez más se habla exclusivamente de “Sala de instancia” y sin embargo es cosa sabida que la reforma considera recurribles también las resoluciones de los Juzgados y Juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo si cumplen ciertos requisitos, por lo tanto ha de considerarse aplicable también a estos últimos lo dispuesto en los apartados mencionados.



ellos.

La diferente nomenclatura no es casual: en un caso la expresión de “motivación suficiente” sugiere una mera verificación de la concurrencia de los requisitos, mientras que en el otro caso se habla de “auto motivado” sin hacer referencia alguna al nivel de motivación exigido. Téngase en cuenta que compartiendo la opinión de PENÍN ALEGRE<sup>40</sup>, “*Hay que recordar que es un control de concurrencia, no de suficiencia, y que se abandona el sistema reglado actual, dotando a la sala de admisión del TS de un margen suficientemente amplio, sea discrecional, sea de concreción de un concepto jurídico indeterminado, como para no precisar una rigidez extrema en este primer escalón depurador*”. La magistrada ofrece además una interesante perspectiva en relación con este control que el órgano de instancia tiene que efectuar, articulándole en tres niveles de exigibilidad: control formal, resbaladizo y exclusivamente externo<sup>41</sup>.

El primero hace referencia al cumplimiento de los requisitos reglados (plazo, legitimación y recurribilidad) cuya concurrencia debería ser apreciada con facilidad por el juez *a quo*. Sin embargo, no incurre en error la parte que ofrece una sucinta motivación sobre los mismos.

El control resbaladizo se relaciona con el cumplimiento de los requisitos de b) a e) exigidos por el artículo 89.2 LJCA. En este segundo nivel, el órgano de instancia ostenta una posición privilegiada ya que habiendo estudiado detenidamente el asunto para su decisión, resulta fácil analizar el cumplimiento de todo lo que *ex lege* se exige.

Finalmente, el control meramente externo se refiere al requisito ex artículo 89.2 letra f) en relación con la concurrencia de los supuestos ex artículo 88 apartados 2 y 3.

Pese a la centralidad del interés casacional objetivo tras la reforma, en este ámbito los poderes del Juez *a quo* son muy escasos, ya que el decisor final sobre la concurrencia de este requisito es el TS. El órgano de instancia, sin embargo, puede opinar sobre la concurrencia de este requisito conforme con lo dispuesto ex artículo 89.5.

---

<sup>40</sup> Penín Alegre, C., en NAVARRO VEGA M.B., ob cit. p. 125.

<sup>41</sup> Penín Alegre, C., en NAVARRO VEGA M.B., ob cit. pp. 132 y ss.

Como ya se ha dicho anteriormente nada dice la Ley acerca de la forma en la que esta opinión habrá de expresarse, sólo se prevé que la misma ha de ser sucinta y fundada. Sin duda, la opinión del órgano autor de la resolución recurrida es importante para averiguar la necesidad de un pronunciamiento por parte del Alto Tribunal. De hecho, al menos en teoría, es el órgano judicial de instancia quien, al haber estudiado con detenimiento el asunto, mejor sabe, al menos en principio, si concurre o no el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

### **3.2. SOBRE LA ADMISIÓN, LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y LA POSTERIOR SENTENCIA.**

Una vez tenido por preparado el recurso y remitidos los autos originales y el expediente a la Sala del TS, la Sección que se dedica a la admisión puede, siempre que la índole del asunto lo aconseje, decidir oír a las partes en el plazo común de 30 días en relación con la presencia del interés casacional objetivo.

Esta Sección, cuya composición ha sido objeto de estudio en el epígrafe 2, adoptará como en su momento se dijo, una resolución diferente según el recurso presente o no interés casacional objetivo. En el primer caso la resolución tendrá la forma de auto motivado, en el segundo de auto o providencia según nos encontremos en los supuestos reglados en el 88.3 o 88.2 LJCA respectivamente y siempre que el juez a quo no haya hecho uso de la facultad otorgada ex artículo 89.5 LJCA ya que en este caso la inadmisión también habrá de hacerse mediante auto.

Los autos de admisión precisarán las cuestiones en relación con las que se repite existente el interés casacional objetivo, identificando las normas y la jurisprudencia infringidas objeto de interpretación, siempre dejando abierta la posibilidad que se amplíe el debate a otras normas o jurisprudencia que se consideren relevantes.

Las providencias, en cambio, serán más escuetas, limitándose a indicar que la inadmisión deriva de: la ausencia de requisitos reglados, incumplimiento de los requisitos del escrito de preparación ex artículo 89.2, irrelevancia de las infracciones denunciadas o carencia del interés casacional.

Una vez admitido el recurso, el recurrente dispone de un plazo de 30 días para formalizar

el escrito de interposición. Contrariamente a lo que se prevé para el escrito de preparación, la regulación en este caso es mucho más sintética.

La reforma aporta un cambio relevante a la anterior regulación y es que a diferencia del régimen anterior, en el que la admisión se decidía una vez presentados los dos escritos, actualmente el escrito de interposición se reserva para un momento posterior a la admisión. De acuerdo con MEDIAVILLA CABO<sup>42</sup>, llama la atención el hecho que el expediente y los autos estarán de manifiesto en la Oficina Judicial, por el trastorno que puede suponer para los letrados.

Es preciso tener en cuenta que los letrados muchas veces no coinciden con los que se han ocupado del proceso de instancia y aún coincidiendo muchos de ellos, ejerciendo en otras comunidades autónomas, deberán desplazarse a Madrid para una visión completa de los autos y el expediente, con todos los gastos que ello supone. Quizás es esta una ocasión propicia para implementar la utilización de las nuevas tecnologías informáticas.

El artículo 92.3 LJCA establece que el escrito de interposición deberá, en apartados separados y encabezados con un epígrafe expresivo de lo que tratan:

1) Exponer razonadamente la razón de la infracción de las normas o la jurisprudencia que se han identificado en el escrito de preparación, debiéndose analizar, y no solo citar, las sentencias del TS que se consideran expresivas de la jurisprudencia citada para justificar su aplicabilidad al caso.

En cuanto a las normas, no bastará la mera cita de las mismas debiéndose argumentar la razón de la infracción. Por lo que atañe a la jurisprudencia hay que poner de manifiesto una equivocación del legislador dado que el artículo 93.2 se refiere única y exclusivamente a la jurisprudencia de la Sala del TS, expresiva de las infracciones lamentadas por el recurrente. Esta previsión que quizás tenía sentido en el régimen anterior, no tiene ninguna razón de ser en la actual regulación. En efecto no ha de olvidarse que las letras e) y f) del artículo 88.2 que regula los supuestos en los que se puede apreciar el interés casacional objetivo, contienen una expresa referencia a la jurisprudencia del TC y del TJUE respectivamente. Es claramente contradictorio permitir que se invoque únicamente la jurisprudencia del TS.

---

<sup>42</sup> MEDIAVILLA CABO J.V., Los escritos de preparación e interposición del recurso de casación, en NAVARRO VEGA M.B., ob cit pp. 107 y ss.

Por lo tanto, pese a su desafortunado tenor literal, ha de concluirse que la referencia a la jurisprudencia ha de ser extensivamente interpretada, incluyendo también la del TC y del TJUE.

2) Precisar el sentido de pretensiones y pronunciamientos solicitados, esto es, expresar si lo que se pide es la anulación total o parcial de la resolución recurrida, la resolución del litigio por el TS o la devolución de los autos al órgano de instancia ordenando la retroacción de actuaciones. Es evidente que esta previsión contiene un eco de la presencia del *ius litigatoris* aunque sólo en un nivel inferior ya que las partes, antes de poder ver garantizados sus derechos, han de pasar por el estricto filtro del interés casacional objetivo.

Ha de destacarse que el citado Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del TS<sup>43</sup>, también ofrece una regulación de las condiciones extrínsecas del escrito de interposición, previendo entre otras cosas, que éste y el escrito de oposición tendrán una extensión máxima de 50.00 caracteres correspondientes a 25 folios, regulando además márgenes e interlineado, fuente y tamaño. No podemos dejar de reiterar que no es razonable que este escrito, en el que *de facto* no se hace otra cosa que repetir todo lo dicho en el escrito de preparación, tenga prevista una extensión equivalente casi al doble del escrito anterior.

En este caso, el Acuerdo mencionado habla de verdaderas “normas” ya que éstas están respaldadas por lo dispuesto ex artículo 87 bis apartado 3.

En cuanto a la vista, la regla general parece ser la celebración de la misma, salvo que se considere innecesaria. Se prevé también la posibilidad de celebrar vista pública o que la votación y fallo tengan lugar ante el pleno de la Sala.

Finalmente, y para concluir el análisis de la tramitación del recurso, llama la atención que casi nada se diga en relación con el escrito de oposición, conteniéndose en cambio una regulación del mismo únicamente en el acuerdo del TS sobre sus condiciones extrínsecas. La LJCA se limita a referirse a la parte recurrida en dos ocasiones: en el artículo 89.6

---

<sup>43</sup> Acuerdo de 20 de abril de 2016, publicado en el B.O.E. n. 162 de julio de 2016, pp. 47539 y ss.

previando que contra el auto de admisión esta parte no podrá interponer recurso alguno pero podrá oponerse a su admisión ante el TS si lo hiciere dentro del término de emplazamiento; y en el artículo 92.5 disponiendo que una vez admitido a trámite el recurso y presentado el escrito de oposición se dará traslado de éste a la parte o partes recurridas y personada para que puedan oponerse en el plazo común de 30 días. Una regulación muy sintética que quizás pueda plantear problemas en la práctica que necesiten de pronunciamientos por parte del Alto Tribunal.

#### **4. SOBRE LA RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS: LA *CONDITIO SINE QUA NON* DE LA “DOCTRINA DAÑOSA Y SUSCEPTIBLE DE EXTENSIÓN DE EFECTOS”.**

Antes de centrar el análisis del interés casacional objetivo, merece la pena detenerse sobre otro elemento que también en la práctica puede plantear problemas, esto es la exigencia de contener doctrina dañosa y susceptible de extensión de efectos para que las resoluciones de Juzgados y Juzgados Centrales de lo Contencioso administrativo puedan ser recurridas en casación.

En puridad, para saber cuándo una resolución es susceptible de extensión de efectos, habría que acudir al artículo 110 LJCA que precisamente se refiere a la extensión de efectos de las sentencias en materia tributaria, de personal y de unidad de mercado, siempre que concurren unos requisitos: que los interesados se encuentren en la misma situación jurídica de los favorecidos por el fallo; que el órgano sentenciador fuera competente por razón de territorio para conocer de las pretensiones en relación con las que se solicita la extensión de efectos y que la extensión se solicite en el plazo de un año desde la última notificación a quienes fueron parte en el proceso de la resolución cuyos efectos se pide extender. A esta previsión habría de añadirse lo dispuesto ex artículo 111 LJCA, según el cual los recurrentes afectados por la suspensión, tras la resolución del denominado “pleito testigo”, pueden solicitar la extensión de efectos en el plazo de cinco días computados desde la declaración de la firmeza de la sentencia dictada en el pleito tramitado con carácter preferente. Esto implica que, al menos en principio, las resoluciones susceptibles de extensión de efectos sean las recaídas en estos ámbitos.

La Sala de lo contencioso del Alto Tribunal ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el alcance de la expresión “susceptibles de extensión de efectos” .

El ATS de 26 de abril de 2017 (RQ 177/2017), precisa que:

*“la alusión a la extensión de efectos no puede entenderse de otra manera que referida a la contemplada en los arts. 110 y 111 de la Ley de esta Jurisdicción. En lo que aquí concierne, el mencionado art. 110 LJCA establece la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación individualizada a favor de una o varias personas, si se ha dictado en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública o de unidad de mercado y si concurren las circunstancias enumeradas en el precepto. No se produce en este sentido innovación alguna; la reforma de la casación no altera conceptos presentes en la ley de la jurisdicción”.*

A este propósito, añade el ATS 13/11/2017 (RQ 558/2017), que

*“Cuando nos hallamos, como aquí sucede, ante sentencias de los órganos unipersonales, la aplicación de la doctrina expuesta supone que, preparado el escrito del recurso de casación, el órgano judicial a quo debe verificar (i) que la sentencia es susceptible de extensión de efectos, (ii) que se ha argumentado por el recurrente que dicha sentencia contiene doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y (iii) que el escrito de preparación reúne los requisitos a los que se refiere el artículo 89.2 LJCA. La primera de esas circunstancias (la posibilidad de extensión de efectos de la resolución recurrida) es objetiva: nuestra Ley Jurisdiccional determina en los artículos 110 y 111 qué sentencias son susceptibles de extensión de efectos, de suerte que el órgano judicial que ha dictado la resolución que pretende recurrirse en casación puede comprobar que la misma reúne los requisitos que aquellos preceptos determinan objetivamente...”*

La Sala, por tanto, mantiene una postura rigurosa sobre la extensión de efectos, la cual pues, no es nominativa o formal y no puede aplicarse de forma general.

En cuanto al alcance de la expresión “doctrina gravemente dañosa para los intereses generales” ha de subrayarse que en realidad la misma no constituye algo novedoso y ajeno a la LJCA. En efecto los derogados artículos 100 y 101 LJCA (este último de manera especial, refiriéndose a las sentencias dictadas por los Juzgados), contenían la misma previsión en relación con el recurso de casación en interés de la Ley. La jurisprudencia anterior a la reforma relativa a los dos preceptos mencionados y especialmente, la dictada en ámbito constitucional, definen el interés general, como algo cualitativamente distinto del interés de suma de los ciudadanos. Así, en la STC 121/1999 de 28 de junio, en palabras de Abogado del Estado<sup>44</sup>, *“en nuestro ordenamiento constitucional la expresión “interés general” es el trasunto de los conceptos “bien común” o “bien público”; de tal forma que la referencia a la condición de general del interés no supone designación de un interés compartido por un número indefinido de personas, un simple interés de clase o categoría por amplio que sea, sino un interés cualitativamente distinto, el interés de la comunidad política como un todo”.*

La idea de interés distinto y más amplio que el de parte se comparte también por la Sala

---

<sup>44</sup> STC 121/1999, de 28 de junio. Recurso de Amparo n. 2017/1996. Antecedente décimo.

del TC <sup>45</sup> que en la citada sentencia afirma que para que pueda considerarse dañado el interés general, han de haberse dictado *“resoluciones judiciales que ocasionan un perjuicio o gravamen en un interés que no es propio y exclusivo de la parte, sino de carácter general”*.

Algo diferente es la opinión de RODRÍGUEZ CARBAJO, que TOLOSA TRIBIÑO recoge en un interesante artículo sobre el nuevo recurso de casación<sup>46</sup>, según la que *“Habrá que entender que la doctrina de una sentencia es gravemente dañosa para los intereses generales en función de una posible posterior y repetida actuación de los Tribunales de instancia, al conocer casos iguales, que se suponen de fácil repetición, es decir, tiene que ser razonablemente previsible la reiteración de actuaciones administrativas iguales a la que ha sido enjuiciada por la sentencia impugnada o la existencia de un número importante de afectados por el criterio de la sentencia recurrida”*. Definición esta, quizás más “simplista” que no se hace eco de los anteriores pronunciamientos del TC en materia y que, no obstante, parece ser la que finalmente se ha acogido por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, tal y como se expresa en el Auto de 5 de abril 2017 (RC 38/2017), cuando señala que:

*“la jurisprudencia sentada por esta Sala en relación al grave daño para el interés general en el anterior recurso de casación en interés de Ley puede resultar de utilidad para determinar los elementos que identifican esa posible doctrina gravemente dañosa: así, el efecto multiplicador del criterio contenido en la sentencia impugnada, la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico o el número de posibles afectados”*

Quien escribe no puede eximirse de añadir un pequeño matiz. Téngase en cuenta que el artículo 88.2 b) LJCA afirma que se podrá apreciar que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia cuando la resolución impugnada sienta una doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales, es decir, se repite la expresión que el artículo 86.1 *in fine* utiliza para poner de manifiesto la *conditio sine qua non* de recurribilidad de las sentencias del juzgado. Ahora bien surgen inmediatamente una serie de preguntas: ¿esto implica que para las sentencias de los Juzgados el filtro del

---

<sup>45</sup> STC 121/1999, de 28 de junio. Recurso de Amparo n. 2017/1996. FD quinto.

<sup>46</sup> TOLOSA TRIBIÑO C., El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, en NAVARRO VEGA M.B., ob cit pp. 28-29. Véase también la nota núm. 6.

interés casacional objetivo se hace aún más estricto? Para que se considere que existe el interés casacional objetivo, es necesaria la presencia de doctrina gravemente dañosa y susceptible de extensión de efectos pero ¿habrá de acompañarse además otro de los supuestos contenidos en los apartados 2 y 3 del artículo 88? O, por el contrario, ¿la presencia de la doctrina dañosa implica ya por sí misma la existencia de interés casacional objetivo absorbiendo todos los demás supuestos?

A nuestro juicio resulta más defendible la tesis de la necesidad de acreditar, junto con la existencia de la doctrina dañosa, también la presencia de al menos otro de los supuestos ex artículo 88.2 y 3 LJCA. La razón se encuentra en que ha de tenerse presente que, tal y como se desprende por la lectura conjunta de los artículos 86 y 88 LJCA una cosa es la recurribilidad de la resolución y otra cosa distinta es su admisión a trámite. Es decir, una resolución es recurrible cuando, como se ha dicho anteriormente, se cumplen todos y cada uno de los requisitos legales, entre ellos en el escrito de preparación conformemente a lo dispuesto ex artículo 89.2 f. En consecuencia, ha de fundamentarse la concurrencia de alguno o algunos de los supuestos ex artículo 88.2 y 3 y, por lo tanto, no se incurre en error si se dice que, en realidad, la presencia de interés casacional objetivo es también un requisito de recurribilidad. Ahora bien, para que un recurso pueda ser admitido a trámite la exclusiva y excluyente condición de admisibilidad es la apreciación por la Sala de la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Entonces, en virtud de todo lo dicho, podría considerarse que la presencia de doctrina dañosa y susceptible de extensión de efectos en relación con las resoluciones de los Juzgados, ha de considerarse como una condición de recurribilidad que se acompaña a los demás requisitos que toda parte ha de acreditar si quiere recurrir en casación, pero no es suficiente como condición de admisibilidad, ya que a junto a misma, habría que acreditarse la concurrencia de alguno de los supuestos ex artículo 88.2 y 3 LJCA.<sup>47</sup>

Este razonamiento parece estar respaldado por la postura adoptada por el Alto Tribunal en el ATS de 2 de noviembre de 2018 (RQ 193/2018):

*“a la vista del escrito de preparación, el órgano judicial a quo debe verificar (i) que la sentencia es susceptible de extensión de efectos, (ii) que se ha argumentado por el recurrente que dicha sentencia contiene doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y (iii) que el escrito de preparación reúne los requisitos a los que se refiere el*

---

<sup>47</sup> En la misma línea, véase la opinión de SANTAMARÍA PASTOR J.A., en NAVARRO VEGA M.B., ob cit pp. 62-63.



artículo 89.2 LJCA.

En el mismo sentido, el ATS 30 de mayo de 2017 (RC 265/2017)<sup>48</sup>, aclara que las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados serán recurribles en casación únicamente “*cuando concurren de forma cumulativa los dos presupuestos mencionados en el precepto: que la sentencia que se pretende impugnar contenga doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y que se trate de una resolución susceptible de extensión de efectos*”.<sup>49</sup>

## **5. SOBRE EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE JURISPRUDENCIA. COMPARACIÓN CON LA REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO.**

Para concluir el análisis de los aspectos teóricos de la reforma del recurso de casación y antes de pasar a los problemas prácticos, por último, pero no menos importante, *dulcis in fundo*, como ya el refrán latino sostenía, no se puede prescindir de centrar la atención sobre la que se puede definir como “la caja de Pandora” del nuevo recurso de casación: el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Tras la reforma, este dato constituye la única razón de justificación para la admisión del recurso.<sup>50</sup>

Ahora bien, si en teoría parece bastante lineal el esquema de la admisión del recurso de casación en su configuración post-reforma, en la práctica no es menos cierto que muchos problemas se plantean en relación con el significado que ha de atribuirse a la expresión “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

La cuestión estriba en que tras una lectura superficial de los preceptos reguladores de la casación pueda parecer que, en principio, la Ley ofrece una respuesta clara a la hora de

<sup>48</sup> Múltiples son las resoluciones que han reiterado este criterio jurisprudencial. Entre otras, vid. ATS 15/11/2018, RQ 369/2018; 10/12/2018, RQ 466/2018; 24/5/2019, RQ 90/2019, y 14/6/2019, RQ 171/2019.

<sup>49</sup> La necesidad de cumplir de manera cumulativa los requisitos indicados, también se mantiene por López Menudo, F., en “El recurso de casación ¿Jurisprudencia o Justicia?”, Revista de Administración Pública nº 207 septiembre – diciembre 2018, pp. 34-35.

<sup>50</sup> Cabe destacar que ya en el Informe del Ministerio de Justicia antes referenciado se decía en la p. 67 “*hace seis años un grupo significativo (21) de magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, elaboró una propuesta (“Exposición razonada, relativa al Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y reforma del recurso de casación, del parecer de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la suscriben”)* en la que se sugería potenciar el empleo del “interés casacional”, convirtiéndolo en razón única para la admisión del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo.” Parece, por lo tanto, que la reforma se haya hecho eco, al menos en algunas previsiones, de las propuestas de los magistrados de la Sala Tercera. Esta actuación del legislador es sin dudas positiva ya que en efecto son los Jueces los que pueden apreciar con más criticidad los problemas que se plantean en relación con la “aplicación práctica” del ordenamiento jurídico.

preguntarnos qué ha de entenderse por interés casacional objetivo, en la realidad, esta expresión no podría ser más indeterminada. De hecho, no es baladí subrayar que si bien el artículo 88 contiene un doble listado de circunstancias que ya han sido analizadas en el epígrafe segundo, en el mencionado precepto se dice expresamente que el TS podrá apreciar que existe interés casacional objetivo cuando “entre otras circunstancias” la resolución impugnada contenga una de las infracciones reguladas en los apartados 2 y 3 del artículo 88. Es decir, el listado no es agotador y deja al TS la facultad de apreciar dicho interés en otros supuestos diferentes de los mencionados.

Es importante decir que como recuerda TOLOSA TRIBIÑO<sup>51</sup>, el concepto de interés casacional objetivo no es ajeno al Alto Tribunal. De hecho, la anterior redacción de la LJCA en el artículo 93.2 e) disponía en relación con los asuntos de cuantía indeterminada que no se refirieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición de carácter general, que el TS podía inadmitir el recurso si éste estuviera fundado en el motivo recogido ex artículo 88.1 d) esto es, infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, si se apreciara que el asunto careciera de “interés casacional”.

Por lo tanto, en la anterior redacción de la LJCA el mencionado interés estaba presente en su versión negativa, es decir, considerado como causa de inadmisión. Sin embargo sería demasiado simplista pensar que basta interpretar a contrario la jurisprudencia anterior sentada por el TS para conocer el verdadero significado de esta expresión.

Ha de tenerse en cuenta que esta expresión no es exclusiva del ámbito contencioso administrativo ya que en ámbito civil el artículo 477.3 LEC dispone que se considera que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del TS; resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de 5 años en vigor (en éste último caso siempre con la *conidictio* que no exista jurisprudencia del TS en relación con normas de igual o similar contenido).

Si bien lo dispuesto por la casación civil se corresponde con algunos de los supuestos del artículo 88.2 y 3, es evidente que existe una profunda diferencia en los dos órdenes

---

<sup>51</sup> TOLOSA TRIBIÑO, C., El nuevo recurso de casación contencioso administrativo, en NAVARRO VEGA M.B., ob. cit. p. 31 y ss.

jurisdiccionales ya que, al menos atendiendo al tenor literal del precepto, en el caso civil el “corsé” que se pone al Alto Tribunal es, en principio mucho, más estricto, dejando muy poco margen de maniobra.

Pues bien, no se incurre en error si se dice que los magistrados de la Sala Tercera disponen de un poder discrecional notablemente más amplio que los compañeros de la Sala Primera.<sup>52</sup> La *ratio essendi* de esta regulación podría ser, como recuerda VELASCO CABALLERO<sup>53</sup>, la creación de una “*jurisprudencia cualificada, apta para ser seguida por todos los operadores del Derecho. Pretende la LJCA que la jurisprudencia casacional sea selectiva, programada, cierta, coherente y previsible*”. Este objetivo es el *fil rouge* de toda la reforma y resulta patente en muchos puntos de la misma, en la selección discrecional de asuntos, en la publicación de los autos de admisión e incluso en el hecho que sea el TS quien elija las normas cuya interpretación sea necesaria, pudiendo incluso ampliar el debate también a normas que no han sido introducidas en los escritos por las partes.

La técnica de la introducción de una *conditio sine qua non* como condición de admisibilidad del recurso de casación, en realidad no es novedosa. La L.O 6/2007<sup>54</sup> introdujo una modificación muy relevante en el artículo 50 de la L.O. del Tribunal Constitucional en relación con la admisión del recurso de amparo: en la letra b) del apartado primero de dicho precepto se prevé que para que el recurso de amparo pueda ser admitido a trámite ha de justificarse “*su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.*”

Se dice que la apreciación de la especial trascendencia constitucional ha objetivado el amparo constitucional.<sup>55</sup> No es suficiente que se haya vulnerado un derecho fundamental,

<sup>52</sup> En la misma línea, es muy interesante el juicio de SANTAMARÍA PASTOR, J.A., en Una primera aproximación al nuevo sistema casacional, Revista de Administración Pública, núm.198/2015 septiembre-diciembre 2015, pp. 22-23.

<sup>53</sup> VELASCO CABALLERO F., Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182/2017 enero-marzo 2017, p. 139.

<sup>54</sup> L.O. 6/2007, de 24 de mayo por la que se modifica la L.O. 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. BOE núm. 125, de 25 de mayo de 2007 pp. 22541 a 22547.

<sup>55</sup> En este sentido véase VELASCO CABALLERO F., VELASCO CABALLERO F., Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182/2017 enero-marzo 2017, pp. 149 y ss.

sino que la lesión ha de llevar aparejado un interés “especial” para la interpretación de la Magna Carta.

En realidad, a juicio de quien escribe, si bien en línea teórica puede compartirse esta afirmación, en la práctica, al menos en la actual configuración, la admisión del recurso de amparo está muy lejos de ser una admisión objetivada. Téngase en cuenta que la previsión del artículo 50 no es otra cosa que un cajón vacío que ha de ser llenado por el TC, con lo que será éste que, discrecionalmente, apreciará si el asunto reviste especial trascendencia constitucional, definiendo a través de sus pronunciamientos el alcance de esta expresión.

Esta opinión está respaldada por el hecho que el mismo TC en la STC 155/2009<sup>56</sup> afirme en el FD segundo que “ *El carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de “especial trascendencia constitucional”, como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación, confieren a este Tribunal un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido de un recurso de amparo “justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional.”*”

Merece la pena destacar que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en relación con la especial trascendencia constitucional en el asunto Arribas Antón c. España<sup>57</sup>. En el párrafo 41 de esta sentencia se dice que es necesario que el “*Tribunal Constitucional defina el contenido y el alcance del criterio de especial trascendencia constitucional, lo que se empeña en hacer desde la modificación de su Ley Orgánica en 2007 (párrafos 20 y siguientes anteriores) y, por otra parte, que explicité su aplicación en los asuntos declarados admisibles con el fin de garantizar una buena administración de la justicia.*”

Este pronunciamiento del TEDH es muy interesante sobretodo porque en los párrafos 20 y siguientes, contiene una recopilación de la más relevante jurisprudencia constitucional en la materia. No falta, como es lógico, una referencia a la antes mencionada fundamental STC núm.155/2009 de 25 de junio, en la que el TC expresa con claridad meridiana su doctrina en materia de especial trascendencia constitucional. En su FD segundo se

<sup>56</sup>STC (Pleno) núm. 155/2009 de 25 de junio recurso núm. 7329/2008.

<sup>57</sup> STEDH de 20 de enero de 2015, demanda núm. 16363/11.

expresa lo siguiente:

*“(...) Constituye el elemento más novedoso o la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3) de esta regulación del recurso de amparo el requisito sustantivo o de fondo de la “especial trascendencia constitucional” que impone el artículo 50.1 b) LOTC para la admisión del recurso. En él se plasma la opción del legislador, en el ejercicio de la habilitación que constitucionalmente le confiere el artículo 161.1 b) CE, en relación con su artículo 53.2, por una nueva configuración del recurso de amparo, toda vez que, en principio, tras la reforma llevada a cabo la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su “especial trascendencia constitucional”, frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba en su anterior regulación, en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas del demandante susceptibles de amparo. Así pues, para la admisión del recurso de amparo no es suficiente la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública del recurrente tutelable en amparo [artículos 53.2 y 161.1 b) CE y 41 LOTC], sino que además es indispensable, en lo que ahora interesa, la especial trascendencia constitucional del recurso [artículo 50.1 b) LOTC]. El recurso de amparo, en todo caso, sigue siendo un recurso de tutela de derechos fundamentales. De esta forma se configura por el legislador el sistema de garantías de los derechos fundamentales encomendado a los Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos (STC 227/1999, de 13 de diciembre, FJ 1), a los que confiere un mayor protagonismo en su protección (ampliación del incidente de nulidad de actuaciones), y culminado por el Tribunal Constitucional que, además de garante último, es su máximo intérprete (artículos 53.2 y 123 CE y 1.1 LOTC).).*

*Aunque el recurrente ha de satisfacer necesariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 in fine LOTC, la carga de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso (AATC 188/2008, de 21 de julio; 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre), es a este Tribunal a quien corresponde apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa “especial trascendencia constitucional”; esto es, cuándo, según el tenor del artículo 50.1 b) LOTC, “el contenido del recurso justifique una decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional”, atendiendo para ello a los tres criterios que en el precepto se enuncian: “a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”. El carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de “especial trascendencia constitucional”, como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación, confieren a este Tribunal un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido de un recurso de amparo “justifi[ca] una decisión sobre el fondo ... en razón de su especial trascendencia constitucional”. Como es obvio, la decisión liminar de admisión a trámite del recurso al apreciar el cumplimiento del citado requisito no limita las facultades del Tribunal sobre la decisión final en relación con el fondo del asunto.*

Más adelante en el último apartado del FD segundo se ofrece una interpretación de los supuestos en los que se considera existente la “especial trascendencia constitucional”.

Estos casos son:

*“a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el artículo 10.2 CE; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción*

*ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios.”.*

Tras este análisis de la jurisprudencia constitucional, es evidente que el recurso de amparo, si bien *prima facie* parecía dar lugar a incertidumbre e imprevisibilidad en relación con la existencia de la especial trascendencia constitucional, ha evolucionado, gracias a la labor del Tribunal Constitucional, hacia una mayor objetivación.<sup>58</sup>

No cabe duda de que esta evolución ha influido en la regulación del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo. En efecto, la noción de especial trascendencia constitucional desarrolla la misma función del interés casacional objetivo en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Lo que se auspicia es que cuanto antes el TS se pronuncie en esta materia, recorriendo el mismo camino que hace 8 años empezó el TC con la STC 155/2009, en la que se ofrecían unas pautas concretas para el litigante que debe recurrir en casación.

*Ad impossibilia nemo tenetur*, decían ya los romanos y lo que se espera es que el Alto Tribunal facilite de alguna forma la tarea del recurrente en casación haciéndola “menos imposible y tortuosa”, cerrando al menos en parte los “agujeros negros” que el legislador ha dejado abiertos.

## SEGUNDA PARTE

### 6. LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS MÁS RELEVANTES ORIGINADOS POR LA REFORMA. (ANÁLISIS DE ALGUNOS AUTOS RELEVANTES).

Concluido el análisis sobre las cuestiones teóricas más relevantes del nuevo recurso de casación, conviene ofrecer un enfoque de los problemas prácticos más relevantes que han surgido a la hora de su aplicación y enjuiciamiento. Esta tarea se llevará a cabo a través del estudio de algunos de los autos publicados en la página web del Tribunal Supremo y

---

<sup>58</sup> En la misma línea véase el análisis de VELASCO CABALLERO F., Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 182/2017 enero-marzo 2017, pp. 151 y ss.

en el Cendoj.

Conforme corrobora el listado de recursos admitidos a trámite y publicado en la propia web del TS en aplicación de lo dispuesto ex artículo 90.7 LJCA, desde la entrada en vigor de la nueva regulación del recurso de casación (que recuérdese es el 22 de julio de 2016) el número de éstos se ha reducido sensiblemente.

A continuación, se analizarán, como ya se ha adelantado, los problemas que están afectando a los profesionales que se enfrentan con la regulación de la nueva casación.

### **6.1. PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO TRANSITORIO.**

Uno de los problemas que se ha presentado especialmente en el momento inicial de la nueva regulación del recurso de casación, ha sido el relativo al llamado derecho transitorio.

La disposición final décima de la LO 7/2015 establece que la nueva regulación del recurso de casación entraría en vigor al año de su publicación contenida en el BOE de 22 de julio de 2015, esto es el 22 de julio de 2016. Sin embargo, no se contiene ni en este precepto ni en ningún otro a lo largo de la LJCA alguna regulación relativa al derecho transitorio.

Así pues, dado que la nueva regulación ha entrado en vigor en la fecha mencionada, el problema que se plantea es cuándo y a cuáles resoluciones se aplica. Dicho de otra manera, surge la duda si el 22 de julio ha de tomarse en consideración en referencia con las sentencias dictadas antes de esta fecha y cuyo plazo para recurrir no haya transcurrido, con las notificadas a partir de esta fecha o, finalmente sólo en relación con las dictadas desde el 22 de julio de 2016.

En efecto las respuestas posibles son al menos tres, esto es:

- 1) que serán recurribles en casación al amparo del nuevo régimen las sentencias y autos notificadas a partir del 22 de julio de 2016;
- 2) las que estén en plazo para ser recurridas en esta fecha;
- 3) las dictadas a partir de esta fecha.

El principio *pro actione* parecería considerar aplicable la segunda opción y en efecto ha

de destacarse que la LJCA en su disposición transitoria tercera, que regulaba el régimen transitorio antes de la entrada en vigor de la anterior regulación preveía lo siguiente:

*“1. El régimen de los distintos recursos de casación regulados en esta Ley será de plena aplicación a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor y a las de fecha anterior cuando al producirse aquélla no hubieren transcurrido los plazos establecidos en la normativa precedente para preparar o interponer el recurso de casación que procediera. En este último caso, el plazo para preparar o interponer el recurso de casación que corresponda con arreglo a esta Ley se contará desde la fecha de su entrada en vigor.  
2. Los recursos de casación preparados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la legislación anterior. “*

No es baladí subrayar que esta disposición no se ha derogado y sigue integrando, por consiguiente, el cuerpo de la LJCA dando pie a los operadores del derecho a considerar ésta como interpretación válida analógicamente a falta de una regulación específica.

En efecto, véase, por ejemplo, el ATS 1591/2017 de 8 de febrero de 2017,<sup>59</sup> en el que la representación procesal de la parte recurrente considera que la nueva regulación del recurso de casación ha de aplicarse a las resoluciones judiciales en relación con las que, aun dictadas y notificadas antes del 22 de julio de 2016, no se hubiera presentado escrito de preparación antes de dicha fecha.

Esta postura, no obstante, ha sido prontamente desvirtuada por el Alto Tribunal, que, rechazando la tesis sostenida, ha señalado en el Auto citado que frente a los criterios adoptados por la Sección de admisión no cabe oponer la aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley de la Jurisdicción, *“pues no es a este régimen transitorio al que ha de estarse, sino al de la propia disposición que modificó la regulación, en este caso, del recurso de casación.... sin que tengan cabida regímenes transitorios de otras modificaciones anteriores”*.

La solución propuesta por la Sala de lo Contencioso- Administrativo es pues de aplicación más simple e inmediata. En el ATS 2075/2017 de 1 de marzo<sup>60</sup>, amparándose en el acuerdo adoptado por el mismo TS el 22 de julio de 2016, se dispone expresamente lo siguiente:

*“2o) La nueva regulación casacional se aplicará a las sentencias y autos susceptibles de recurso de casación que tengan fecha de 22 de julio de 2016 en adelante.*

*3o) Las sentencias y autos pronunciados con anterioridad al 22 de julio de 2016 se regirán, a efectos del recurso de casación, por la legislación anterior, cualquiera que sea la fecha en que se*

<sup>59</sup> Roj: ATS 1591/2017, de 8 de febrero de 2017 n. recurso: 153/2016

<sup>60</sup> Roj: ATS 2705/2017 de 1 de marzo de 2017, n. Recurso: 2990/2016.



notifiquen.

*4o) Cuando al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio), se solicite la aclaración o integración de una sentencia o de un auto, la fecha a tomar en consideración para determinar el sometimiento de la resolución al régimen casacional será la de la resolución aclarada o integrada, sin perjuicio de que el plazo para preparar el recurso de casación se compute desde la fecha de notificación del auto de aclaración o integración".*

Por lo tanto, conforme con esta previsión, la nueva regulación se aplicará única y exclusivamente a las resoluciones dictadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación, aplicándose para todas las anteriores y también para aclaraciones e interpretaciones de autos y sentencias dictados con anterioridad, la anterior regulación.

El TS continua diciendo que, en todo caso, se trata de *un criterio hermenéutico perfectamente posible desde el punto de vista de la legalidad* y que además no es novedoso ya que en el régimen transitorio derivado de la reforma de la LJCA llevada a cabo por la Ley 37/2011<sup>61</sup>, recogido en la disposición transitoria única, se preveía expresamente que *“Los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior”*. Por lo tanto, de acuerdo con esta regulación, las sentencias dictadas antes de la entrada en vigor de la Ley se recurrían en casación al amparo de la antigua Ley, mientras que las dictadas con posterioridad se regirán por las nuevas reglas.

Este criterio fue prontamente recogido y asumido en numerosas resoluciones de la Sección de admisión, como, por ejemplo, los AATS de 17/11/2016 (RQ 79/2016), 1/12/2016 (RQ. 80/2016 y 81/2016) y 15/12/2016 (RQ 97/2016), a los que han seguido otros muchos.

La razón determinante de la adopción de este criterio se explica, entre otros, en el ATS 24/5/2017(RQ 151/2016), cuando dice que:

*“[...] expresa un criterio objetivo, en la medida en que la aplicación de uno u otro régimen se ciñe a una fecha concreta y dependiente exclusivamente del órgano jurisdiccional del que procede la resolución recurrida, no quedando al albur de factores externos a la estricta actividad jurisdiccional la opción por uno u otro régimen. Se trata, en todo caso, de un criterio hermenéutico perfectamente posible desde el punto de vista de la legalidad, además de razonado*

---

<sup>61</sup> Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal. BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011, páginas 106726 a 106744.

*y razonable. Más aún, no se trata de un criterio novedoso que se aparte de decisiones precedentes en materia de Derecho transitorio, pues, sin ir más lejos, el régimen transitorio derivado de la reforma de la Ley 29/1998, operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, se rigió por similares parámetros, al disponer dicha Ley en su disposición transitoria única que “Los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior”; con la consecuencia de que las sentencias dictadas antes de la entrada en vigor de dicha Ley se rigieron a efectos casacionales por la Ley antigua mientras que las sentencias dictadas con posterioridad a esa entrada en vigor se rigieron -a los mismos efectos- por las nuevas reglas [v.gr. autos de 12 de julio de 2012 (rec. 821/2012) y 19 de julio de 2012 (rec. 582/2012)]”.*

En síntesis y para que no quede ninguna duda, conforme con la interpretación del Alto Tribunal, para averiguar cuál sea el régimen aplicable a efectos de recurrir en casación una resolución, la fecha que ha de tomarse en cuenta es sencillamente el día en el que la misma resolución ha sido dictada por el órgano *a quo*<sup>62</sup>.

Conviene matizar que, según doctrina sentada por la Sala Tercera, el recurso puede ser admitido aun habiéndose anunciado con invocación errónea de la regulación casacional no aplicable, siempre y cuando, aún en este caso, cumpla suficientemente las exigencias de la regulación realmente aplicable.

Se aclara, por tanto, en el ATS 3/5/2017 (RQ 2952/2016), que la Sala está obligada a considerar el escrito de preparación presentado ante la Sala *a quo* por la parte recurrente: *“desde un punto de vista garantista y procurando que la tutela judicial efectiva del recurrente no se vea amenazada si del contenido de su escrito puede inferirse que éste cumplía con las exigencias del régimen jurídico que le resulta aplicable por razones temporales. Es decir, analizando si, el mismo, a pesar de su articulación al amparo de un régimen normativo inaplicable, cumple con los requisitos y presupuestos que exigía la ley Jurisdiccional”*.

Por ello, si así se aprecia, procederá la admisión del recurso de casación, que, obviamente, habrá de tramitarse conforme a la regulación procesal aplicable *ratione temporis* a la contienda.

---

<sup>62</sup> La postura adoptada sobre este aspecto por la Sala Tercera se resume magistralmente por Huerta Garicano, I., en Los criterios de la Sección de Admisión en orden a la admisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 69 y ss.

## 6.2. EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 89.2 f): EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

Como ya se ha dicho a lo largo del trabajo el eje central sobre el que pivota la reforma del recurso de casación es el llamado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Este aspecto representa la *conditio sine qua non* para la admisión del recurso y además uno de los requisitos que las partes han de fundamentar en los escritos de preparación e interposición.

De especial manera el artículo 89.2.f) prevé que las partes habrán de poner de manifiesto la concurrencia de alguno o algunos de los supuestos que ex artículo 88.2 y 3 permitan la apreciación del interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Alto Tribunal. El incumplimiento de este requisito lleva aparejada, de acuerdo con lo dispuesto ex artículo 89.4, la denegación del emplazamiento de las partes y la remisión de actuaciones a TS y, por ende, en definitiva, no tener por preparado el recurso de casación.

Pues bien, en la aplicación práctica de la nueva regulación de la casación este requisito ha planteado una serie de problemas relacionados con el alcance y la interpretación que ha de darse al referido precepto. El TS se ha pronunciado en numerosas ocasiones e imprescindible resulta el análisis de algunos autos relevantes en materia.

En primer lugar, ha de hacerse referencia al ATS 1331/2017 de 1 de febrero<sup>63</sup>, un pronunciamiento fundamental del Alto Tribunal que se menciona también en muchas de las resoluciones posteriores sobre el tema<sup>64</sup>.

En este pronunciamiento se pone de manifiesto la *ratio essendi* de la reforma llevada a cabo por la LO 7/2015 y también se reconoce la esencial función del escrito de preparación, afirmándose que:

*“ no es posible obviar que la reforma de la regulación del recurso de casación contencioso-administrativo supone un cambio trascendente al pivotar ahora el sistema sobre la existencia (o no) de un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El nuevo artículo 88 LJCA, en su segundo y tercer apartados, enumera los supuestos en los que podrá apreciarse (apartado 2) o se presume (apartado 3) la existencia de ese interés casacional objetivo para la*

<sup>63</sup>ATS 1331/2017 de 1 de febrero n. Recurso 98/2016

<sup>64</sup> Entre muchas otras véase a título ejemplificativo el ATS 2731/2017 de 15 de marzo, n. Recurso 56/2017

*formación de jurisprudencia que justifica un pronunciamiento de la Sala Tercera de este Tribunal. En esta nueva lógica casacional, el escrito de preparación del recurso de casación ante el órgano judicial de instancia adquiere un papel esencial o decisivo como anuncio de las infracciones que se desarrollarán en el escrito de interposición del mismo y la justificación o argumentación de la concurrencia de ese interés casacional objetivo.”*

El TS además se centra sobre la interpretación del requisito exigido por el artículo 89.2 f) expresándolo con claridad meridiana en el anteúltimo apartado del razonamiento jurídico tercero cuyo tenor literal es el siguiente:

*“Debemos reiterar aquí que lo exigido, con carácter novedoso, en el artículo 89.2 f) LJCA tiene una especial importancia ya que se encuentra directamente relacionado con el cambio cualitativo experimentado por el recurso de casación contencioso-administrativo tras su reforma. Lo que impone este precepto como carga procesal insoslayable del recurrente es que, de forma expresa y autónoma, argumente la concurrencia de alguno o algunos de los supuestos del artículo 88. 2 y 3 LJCA que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Tercera. Argumentación, además, que no cabe realizar de forma abstracta o desvinculada del caso concreto planteado, sino que debe proyectarse sobre él como se desprende de la expresión " con singular referencia al caso" que contiene el citado artículo 89.2. f) LJCA. Es decir, esa argumentación específica que exige la ley no se verá satisfecha con la mera alusión o cita a alguno(s) de los supuestos en que la Sala Tercera de este Tribunal podría apreciar ese interés objetivo casacional para la formación de jurisprudencia, sino que será preciso razonar por qué el caso concreto se inscribe o subsume en el supuesto o supuestos que se aducen”*

En síntesis, la carga que le incumbe al recurrente es la de poner de manifiesto *hic et nunc* que la vulneración que pretende hacer valer encaja y se subsume en uno de los supuestos ex artículo 88.2 y 3, ya que el precepto prevé que haya de hacerse una “singular referencia al caso”, bien pudiéndose apreciar la existencia del interés casacional objetivo, o bien presumiéndose la existencia del mismo con todos los matices que se han revelado a lo largo del trabajo. <sup>65</sup>

Esta doctrina ha sido reiterada en múltiples ocasiones, como demuestran, por ejemplo, los ATS de 5 de octubre de 2017 (RQ 470/2017) y de 12 de diciembre de 2017 (RQ 507/2017).

El interés casacional, en definitiva, no debe solo afirmarse, sino, también argumentarse debidamente. Por ello, en palabras del ATS de 3 de octubre de 2018 (RQ 346/2018) no puede tenerse por válidamente preparado un recurso de casación en el que la parte recurrente “*se limita a apuntar un enunciado asertivo sobre la existencia de interés casacional que no se acompaña de ningún razonamiento que lo justifique*”.

---

<sup>65</sup> En el mismo sentido véase al ATS 2723/2017 de 15 de marzo de 2017 n. Recurso 26/2017.

En el mismo sentido, razona el ATS de 8 de enero de 2019 (RQ 365/2018), según el que:

*“no es que se simplemente se enuncien los supuestos y/o presunciones de interés casacional que se estiman concurrentes, sino, dando un paso más, que se fundamente su concurrencia. La palabra que emplea la Ley, en este punto, es “fundamentar”, que significa “establecer la razón o el fundamento de una cosa”; de manera que corresponde a quien anuncia el recurso de casación no sólo apuntar los supuestos de interés casacional sino también argumentar separadamente la pertinencia de su cita. Argumentación que, por lo demás, no puede reducirse a una mera afirmación autojustificativa, sino que ha de consistir en una exposición circunstanciada (esto es, puesta en relación con las concretas vicisitudes del pleito concernido) sobre las razones por las que la parte recurrente estima que se da en el caso litigioso cada uno de los diferentes supuestos o presunciones de interés casacional que invoca.”*

Conforme a lo dispuesto por el artículo 88.2 a) cabe apreciar el interés casacional objetivo cuando la sentencia recurrida fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas del Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamente el fallo que contradiga la establecida por otros órganos jurisdiccionales.

No obstante, conviene recordar que no nos hallamos ante una mera reformulación del antiguo recurso de casación para unificación de doctrina, por lo que no es aplicable sin más, lo que se había establecido en materia de “identidades” en aquel supuesto, si bien se mantiene la necesaria coincidencia sustancial entre las resoluciones sometidas a contraste, por lo que atañe a las normas aplicadas y el substrato fáctico sobre el que éstas se proyectan, como aclara el ATS de 7 de febrero de 2017(RC 161/2016):

*“el artículo 88.2.a) LJCA no opera sólo en presencia de una rigurosa identidad de hechos, sino también cuando se aprecia la existencia de disparidades o contradicciones insalvables entre las sentencias sometidas a contraste, en cuanto concierne a la interpretación de las mismas normas y en relación con un problema de interpretación y aplicación sustancialmente coincidente.”*

A tal propósito, en el ATS de 17 de enero de 2019 (RC 694/2018), se matiza que *“aun cuando tal identidad no es del grado antaño exigido para el extinto recurso de casación para la unificación de doctrina, no significa que la identidad sustancial exigible se diluya hasta extremos de admitir una mera relación indirecta o puramente teórica”*.

Este precepto, que ha de ser interpretado teniendo en cuenta lo dispuesto por el mencionado artículo 89.2 f), también ha exigido una aclaración por parte del Alto Tribunal en relación con su interpretación. En el ATS 1802/2017 de 8 de marzo<sup>66</sup> se

---

<sup>66</sup> ATS 1802/2017 de 8 de marzo de 2017 n. Recurso 40/2017.

sostiene que el juego combinado de los artículos 88.2 a) y 89.2 f):

*“exige de quien pretende recurrir en casación, al menos: (i) la cita precisa y detallada, que habilite sin mayor esfuerzo su identificación y localización, de las sentencias firmes de otros órganos jurisdiccionales eventualmente contradictorias con la recurrida; (ii) el análisis que permita constatar la "sustancial igualdad" de las cuestiones resueltas en unas y otra, en el bien entendido de que la "cuestión" cuya igualdad se predica viene determinada tanto por la norma aplicada como por la realidad a la que se aplica; y (iii) la expresión de que las sentencias confrontadas optan por tesis hermenéuticas divergentes, contradictorias e incompatibles.”*

En idénticos términos se pronuncia también el ATS de 30 de octubre de 2017 (RC 3666/2017).

Por lo tanto, es evidente que la parte recurrente no puede limitarse a la mera afirmación que la resolución impugnada contradice las de contraste, debiéndose necesariamente argumentar dicha aseveración so pena de no tener por cumplida la carga procesal que se establece en el artículo 89.2 f).

En cuanto al supuesto regulado ex artículo 88.2.c), es decir cuando la resolución que se pretende recurrir afecte a un gran número de situaciones bien en sí misma bien por trascender el caso objeto del proceso, también se han planteado numerosas cuestiones.

El TS se ha pronunciado considerando que la afección de un gran número de situaciones por la sentencia que se combate, impone al recurrente, que salvo el caso de los supuestos notorios, explicité dicha afección analizando de manera sucinta pero ineludible la posible influencia de la doctrina contenida en la resolución impugnada en muchos otros supuestos, no siendo suficientes al respecto meras referencias genéricas y abstractas ni tampoco la mera afirmación de la afección se produce por tratarse de la interpretación de una norma jurídica, cuya aplicación a un número indeterminado de situaciones forma parte de su naturaleza intrínseca

En estos términos el TS se ha pronunciado en los autos de 25 de enero de 2017<sup>67</sup> y de 29 de marzo de 2017<sup>68</sup>. Este último supuesto estaba relacionado con un recurso que se pretendía interponer por parte de la Administración General del Estado contra una sentencia dictada por el TSJ de Madrid en un recurso contencioso-administrativo relativo al acuerdo denegatorio de una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el Auto, se pone de

<sup>67</sup> ATS 274/2017 de 25 de enero de 2017, n. Recurso 15/2016.

<sup>68</sup> ATS 2592/2017 de 29 de marzo de 2017, n. Recurso 256/2017

manifiesto lo siguiente:

*“La Administración recurrente se limita a afirmar, sin mayor precisión, que la doctrina de la sentencia que combate afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LJCA ], pues se refiere a los trabajadores de la antigua empresa pública TELEFÓNICA, pero no indica cuántos sean, ni el número de ellos que hayan quedado sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas como consecuencia de las prestaciones del seguro colectivo suscrito por la compañía. Afirma que ya han sido dictadas por la Sala de instancia seis sentencias en el mismo sentido que la recurrida, pero olvida señalar que el acto originario impugnado es la negativa a admitir una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Así pues, se trata de un debate que afecta a un número no precisado de trabajadores de la antigua TELEFÓNICA, pero que, en todo caso, han de ser aquellos que quedaron sujetos al mencionado tributo por la percepción de prestaciones del seguro colectivo y que después solicitaron la rectificación de su autoliquidación. Así delimitado el “ámbito de afección”, la cuestión suscitada no reúne la nota de generalidad que el artículo 88.2.c) LJCA contempla al utilizar las fórmulas de “un gran número de situaciones” y “trascender al caso objeto del proceso”.*

En cambio, el TS reconoce haberse cumplido el requisito ex artículo 88.2 C) en el ATS 6140/2017 de 19 de junio de 2017<sup>69</sup> en el que se considera que:

*“el criterio que establece la sentencia recurrida trasciende del caso objeto del proceso, pudiendo afectar a un gran número de situaciones, surgiendo así el supuesto de interés al que se refiere el artículo 2.c) de la LJCA, al verse concernido un colectivo de más de 600 bomberos en el caso de autos, según manifiesta la parte recurrente, pero que es extrapolable eventualmente a otros empleados públicos que realicen jornadas de especial dedicación o superiores a la jornada ordinaria de trabajo establecida en la disposición adicional 71 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.”.*<sup>70</sup>

Por lo tanto, la mera afirmación de que la resolución impugnada afecta a un número no precisado de situaciones no convierte automáticamente la doctrina en la misma contenida en “gravemente dañosa para los intereses generales”, toda vez que sea posible limitar estrictamente el número de las situaciones afectadas. Es necesario, en cambio, que para que el “ámbito de afección” de la resolución goce de la generalidad requerida ex artículo 88.2 c) existan un “gran número” de situaciones afectadas o se trascienda el caso objeto del proceso.

Esta doctrina, se resume en el Auto ATS de 8 de marzo 2017 (RC 40/2017)<sup>71</sup>, en el que se expresan los requisitos que han de concurrir para la apreciación de este supuesto:

*“La afección de un gran número de situaciones por la sentencia que se combate, puesta en relación con el deber especial que incumbe al recurrente de fundamentar con singular referencia al caso que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia [artículo 89.2.f) LJCA], pide del recurrente que, salvo en los supuestos notorios, en el escrito de preparación (i) haga explícita esa afección, exteriorizando en un sucinto pero ineludible análisis la previsible influencia de la doctrina en otros muchos*

<sup>69</sup> ATS 6140/2017 de 19 de junio de 2017, n. Recurso 1476/2017

<sup>70</sup> véanse en el mismo sentido también los ATS 7313/2017 de 10 de julio de 2017, n. Recurso 1249/2017; 5031/2017 de 31 de mayo de 2017, n. Recurso 1528/2017; 1945/2017 de 6 de marzo de 2017, n. Recurso 246/2016; 5480/2017 de 31 de mayo de 2017 n. Recurso 973/2017.

<sup>71</sup> En el mismo sentido vid. ATS 2/11/2017 (RC 4196/2017), ATS 7/5/2018 (RQ 503/2017), ATS 22/11/2018 (RC 5674/2017), ATS 26/4/2019 (RQ 124/2018), y ATS 14/6/2019 (RQ 184/2019).

*supuestos, (ii) sin que sean suficientes las meras referencias genéricas y abstractas, que presupongan sin más tal afección, (iii) ni tampoco baste la afirmación de que se produce por tratarse de la interpretación de una norma jurídica, cuya aplicación a un número indeterminado de situaciones forma parte de su naturaleza intrínseca”*

En definitiva, habrá de atenderse a la virtualidad expansiva de la que goza la resolución recurrida.

Así lo mantiene el Alto Tribunal en el Auto de 1 de febrero de 2017 (RC 31/2016), cuando dice que *“para apreciar la presencia de esta circunstancia de interés casacional se debe atender de forma prioritaria a la virtualidad expansiva de la doctrina sentada por la sentencia recurrida, que en el caso de autos ni resulta diáfana ni se concreta, más allá de los cuarenta y ocho recursos presentados por la misma entidad recurrente –según informa- y del nítido interés subjetivo de ésta que su existencia pone de manifiesto”*.

Finalmente merece la pena añadir un matiz de no marginal importancia a todo lo anteriormente dicho en relación con el interés casacional objetivo de cara a algunos pronunciamientos del TS y especialmente el ATS de 22 de marzo de 2017<sup>72</sup>. Este auto es una clara expresión de la doctrina según la cual la concurrencia del interés casacional objetivo no siempre lleva aparejada la necesidad de la formación de jurisprudencia.

En efecto, tras la alegación por parte de la recurrente de la existencia del mismo al haberse producido la circunstancia ex artículo 88.3 a) esto es, la inexistencia de jurisprudencia en relación con las normas sobre las que se haya sustentado la razón de decidir de la resolución impugnada, el Alto Tribunal manifiesta que ” *“Es verdad que esta Sala no ha tenido ocasión de pronunciarse expresamente sobre una situación tan particular como la que se contempla en este litigio, pero la formación de jurisprudencia necesariamente ha de obedecer a la interpretación de las normas jurídicas vigentes para su común aplicación”*. Todo esto no sucedía en el caso objeto del recurso al tratarse de un precepto (el artículo 136 LGT) cuyo tenor literal había sido modificado por la Ley 34/2015 de 21 de Septiembre, de modificación parcial de la LGT.

Por ello, y dado que el interés casacional se caracteriza como un interés objetivo, es evidente que aquellas controversias que se configuren como puramente casuísticas carecerán, en principio, de tal interés.

---

<sup>72</sup> ATS 2121/2017 de 22 de marzo de 2017, recurso de casación n. 218/2016.



La Sección Primera (de Admisión), de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el ATS de 25 de mayo de 2017 (RC 1132/2017) ha precisado que *“(...)el recurso puede ser inadmitido mediante auto, precisamente por carecer manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, si se pretende anudar el interés casacional a infracciones normativas circunscritas a las concretas vicisitudes del caso litigioso sin trascender a cuestiones dotadas de un mayor contenido de generalidad o con posible proyección a otros litigios”*.

Resaltándolo con aún más fuerza en el ATS de 26/9/2018 (RQ 238/2018) que señala que: *“son ajenas a la finalidad del nuevo recurso de casación las controversias que se reducen a cuestiones puramente casuísticas y singularizadas, carentes como tales de una dimensión hermenéutica del Ordenamiento que permita apreciar su proyección o repercusión, al menos potencial, sobre otros posibles asuntos”*.

En este sentido, también se pronuncia el ATS de 19 de noviembre 2018 (RQ 243/2018):

*“En efecto, el escrito de preparación que nos ocupa cumple las exigencias del artículo 89.2 LJCA en cuanto se refiere a los requisitos de plazo, legitimación, recurribilidad de la resolución impugnada, identificación de las normas cuya infracción se denuncia y justificación de su relevancia sobre el «fallo». Sin embargo, no satisface el trascendental requisito del apartado f) de dicho precepto.*

*Así, el apartado intitulado como “V” de dicho escrito de preparación incorpora un extenso razonamiento pretendidamente dirigido a justificar el interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia; pero basta su lectura para constatar que la parte no argumenta un interés casacional “objetivo”, sino que se refiere insistentemente a las circunstancias puramente casuísticas del pleito de instancia y de la respuesta dada al mismo por la Sala a quo, denunciando, pues, no una interpretación incorrecta de normas jurídicas que haya que esclarecer en sede casacional, sino su pura aplicación práctica en el concreto pleito aquí concernido.*

*Más específicamente, no se justifica la concurrencia de los supuestos y/o presunciones de interés casacional de los apartados 2º y 3º del artículo 88 LJCA a los que se pretenden reconducir esas alegaciones. La parte se refiere por separado al interés casacional de cada una de las tres infracciones jurídicas que denuncia, recordemos, infracción por la sentencia de instancia del principio de cosa juzgada, indebida aplicación 79 de la doctrina sobre la irrecurribilidad de los actos de trámite, e incorrecta imposición de las costas del proceso. Ahora bien, la cita de tales supuestos y presunciones carece de utilidad a los efectos pretendidos porque los mismos se invocan desde una perspectiva meramente casuística en cuanto que ligada a las concretas circunstancias del pleito.*

*Así las cosas, falta en el escrito de preparación, desde la perspectiva del artículo 89.2.f) LJCA, la exposición argumentada del interés casacional “objetivo” para la formación de la jurisprudencia, por lo que, en definitiva, la denegación de la preparación del recurso fue correcta y ajustada a Derecho.”*

En virtud de todo lo dicho resulta evidente entonces que no basta con que se acredite la existencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, sino que resulta menester que se considere fundamental formar jurisprudencia sobre el tema, de

acuerdo con la función nomofiláctica y de *ius constitutionis* que como se ha dicho la reforma atribuye al TS.

En esta óptica, el ATS de 26 de Septiembre de 2018, resume con claridad meridiana que: *“el actual recurso de casación se aparta del caso concreto y de la solución particularizada y se dirige a la solución de situaciones problemáticas generales y potencialmente relevantes para un gran número de situaciones, de modo que sólo se puede estimar presente un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia cuando la interpretación normativa pretendida por la parte tiene una proyección significativa para una multitud de circunstancias presentes y, en particular, futuras, sirviendo así el principio de seguridad jurídica exigido por el art. 9.3 de la CE”*. De cualquier manera, tampoco cabe llevar esta interpretación hasta el extremo de considerar el recurso de casación como mecanismo de solución de controversias absolutamente ajenas al substrato fáctico que ha motivado la *litis* de la que trae causa, como se expresa con cierta contundencia en el reciente ATS de 12 de abril de 2019 (RQ 83/2019), cuando se dice que *“según jurisprudencia constante el recurso de casación articulado en la L.O. 7/2015, de 21 de julio, persigue como finalidad la formación de jurisprudencia cuando se estime que presenta interés casacional objetivo, pero no en abstracto, sino en relación con la resolución de las cuestiones suscitadas en el pleito que fueron objeto del pronunciamiento en la sentencia o debieran haberlo sido”*.

### **6.3. EL NUMERUS APERTUS DE LOS SUPUESTOS DE “INTERES CASACIONAL OBJETIVO”. LOS REQUISITOS DE LAS “OTRAS CIRCUNSTANCIAS” DE INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO.**

Como ya se ha dicho a la hora de analizar lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 88, el listado contenido en el segundo apartado, a diferencia de lo que ocurre en el tercer apartado en el que se regulan los supuestos en los que se presume la presencia de interés casacional objetivo, no es exhaustivo, y los supuestos en los que es posible apreciar dicho interés no son un *numerus clausus*. El artículo 88.2, de hecho, hace literalmente referencia a la facultad otorgada al Tribunal de casación de tomar en consideración “otras circunstancias” diferentes de los supuestos contenidos en el mismo a la hora de averiguar la concurrencia del interés casacional objetivo.

Sin ninguna duda, debido a que la disposición normativa es muy escueta y deja al Tribunal un amplio margen de maniobra, se plantean en la práctica problemas en relación con la acreditación del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en supuestos que no se encuentran expresamente recogidos en el artículo 88.2.

El Tribunal Supremo, en el ATS 2061/2017 de 15 de marzo<sup>73</sup>, se ocupa por primera vez de los requerimientos que han de cumplirse en estos casos. Se somete al juicio de Sección de admisión del TS un recurso frente a una sentencia dictada por el TSJ de Galicia en materia de Impuesto sobre Sociedades e imposición de sanciones tributarias muy graves. El recurrente lamenta algunas infracciones reconducibles a los supuestos recogidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 88<sup>74</sup> y otras que, en cambio, no es posible subsumir bajo ninguno de los supuestos expresamente previstos.

En cuanto a estas últimas, relativas a la vulneración del artículo 218 LEC en relación con el art 24 CE y a la infracción del artículo 14 CE, el recurrente sostiene<sup>75</sup> que:

- a) *“El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Se expresa mediante sentencias las cuales deben estar motivadas de una manera lógica. Cuando esa motivación es ilógica o irracional no se da satisfacción al principio supremo de la Justicia”.*
- b) *“La confianza de los ciudadanos en la Justicia exige conocer que sus casos son tratados de la misma manera que otros iguales. Resulta conveniente que el Tribunal Supremo sienta doctrina en el sentido de que en el caso de que las secciones de los tribunales apliquen criterios distintos en casos aparentemente iguales a otros resueltos por esas mismas secciones deben señalar las diferencias entre unos y otros, en el caso de que las sentencias de contraste hayan sido invocadas por el demandante”.*

<sup>73</sup> ATS 2061/2017 de 15 de marzo de 2017, n. recurso 91/2017.

<sup>74</sup> En cuanto a las circunstancias ex art. 88.2 a), b) y c), se sostiene por parte del recurrente que:

- la circunstancia de la letra a) concurre porque en la sentencia impugnada se interpreta la prejudicialidad penal de manera diferente a las sentencias que se aportan de contraste y en las que se afirma que la Administración no pueda practicar liquidaciones ni imponer una sanción, si los mismos hechos están siendo enjuiciados en un procedimiento penal a la espera de una sentencia penal firme, incluso en el caso en el que ( como se sostiene en algunas de las sentencias aportadas) los sujetos de los dos procedimientos no sean los mismos.
- la circunstancia de la letra b) porque se considera gravemente dañosa la doctrina sentada por la sentencia, que menoscaba gravemente el principio fundamental de prejudicial penal, siendo inaceptable que los mismos hechos, como se afirma literalmente en el apartado 4.1 del hecho primero del auto objeto de estudio, *“puedan no ser los mismos para los órganos del Estado”.*
- la circunstancia de la letra c) porque dicha doctrina es susceptible de afectar a un gran número de situaciones.

<sup>75</sup> Véanse los apartados 4.3 y 4.4 del hecho primero del ATS 2016/2017.

En estos casos el recurrente no considera subsumibles bajo ninguno de los supuestos regulados en la Ley, las infracciones contenidas en la sentencia impugnada y, por lo tanto, se limita a expresar los términos en los que considera poder apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Ahora bien, dejando al margen el análisis de las razones que el TS considera existentes para la inadmisión en relación con los “supuestos expresos” ex artículo 88.2 a), b) y c), hay que centrar la atención sobre los que se pueden identificar como “supuestos no definidos” a los que, como afirma expresamente el Tribunal en los razonamientos jurídicos del mismo Auto, es posible reconducir las vulneraciones de los artículos 218 LEC, 24 CE y 14 CE ya que el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, *“no se sustenta en ninguna de las circunstancias del apartado 2 ni de las presunciones del apartado 3 del artículo 88 LJCA, por lo que ha de sobreentenderse que se fundamenta en otras circunstancias distintas.”*<sup>76</sup>

El Alto Tribunal, ofrece a lo largo de los razonamientos jurídicos, un análisis de los requisitos que el recurrente ha de cumplir a la hora de amparar su recurso en la existencia de las “otras circunstancias” que el artículo 88.2 menciona en referencia con la existencia del interés casacional. Se afirma literalmente en los apartados 6.1 a 7, RJ segundo que:

*“6.1. El carácter abierto de la enumeración de circunstancias [«entre otras»] que permiten apreciar la presencia de interés casacional objetivo para la formación jurisprudencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 88.2 LJCA , conduce a entender que esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo puede reputarlo existente en el recurso atendiendo a otras razones distintas, no contempladas en dicho precepto, siempre y cuando sean invocadas por el recurrente para justificar que su recurso reúne aquel interés.*

*6.2. La excepcionalidad de la invocación de estas otras circunstancias de interés casacional en la configuración legal del recurso de casación, repárese en que el artículo 89.2.f) LJCA ni las menciona, puesta en relación con el deber especial que dicho precepto impone al recurrente de fundamentar con singular referencia al caso que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, exige del recurrente que en el escrito de preparación, al menos: (i) advierta expresamente que el interés casacional objetivo no se fundamenta ni en las circunstancias del artículo 88.2 LJCA ni en las presunciones del artículo 88.3 LJCA , y (ii) justifique cuidada y rigurosamente el interés casacional objetivo del recurso que revela la circunstancia invocada, que lógicamente no habrá de ser reconducible a alguna de las circunstancias del apartado 2 o de las presunciones del apartado 3 del artículo 88 LJCA .*

*7. El olvido, la omisión, la ausencia o el desconocimiento en el escrito de preparación del recurso de las exigencias expuestas determina su inadmisión por incumplimiento del artículo 89.2.f) LJCA , en virtud de lo dispuesto en el artículo 90.4.b) LJCA “*

Conforme con la interpretación del TS será entonces el recurrente a quien le incumbe la

---

<sup>76</sup> ATS 2061/2017 apartado 3 RJ tercero.

carga de poner de manifiesto al Tribunal de casación que la circunstancia invocada no se encuentra expresamente recogida en la Ley, justificando “cuidada y rigurosamente” la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Ahora bien, como anteriormente se ha dicho, en el caso objeto de estudio, el recurrente había expresado las razones para las que consideraba existente el interés casacional pero centrando la atención y leyendo detenidamente el auto mencionado, en ningún momento se afirma clara y manifiestamente que en relación con las infracciones de los artículos 218 LEC, 24 CE y 14 CE, la presencia de interés casacional no se ampara en ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 88.

El Alto Tribunal, en efecto sostiene<sup>77</sup> que:

*“La entidad recurrente no advierte expresamente que el interés casacional objetivo no se basa ni en las circunstancias del artículo 88.2 LJCA ni en las presunciones del artículo 88.3 LJCA , como ha quedado dicho, y tampoco justifica cuidada y rigurosamente el interés casacional objetivo que revela la circunstancia invocada para cada una de esas infracciones, que lógicamente no habrá de ser reconducible a alguna de las circunstancias del apartado 2 o de las presunciones del apartado 3 del artículo 88 LJCA , por lo que no puede entenderse que haya cumplido el deber especial que el artículo 89.2.f) LJCA le impone de fundamentar en el escrito de preparación, con singular referencia al caso, que concurre en esas infracciones interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.”*

Analizando las razones del TS, parecen evidentes unas series de cuestiones contradictorias y problemáticas.

En primer lugar, si la parte no expresa que el interés casacional no se fundamenta en ninguna de las circunstancias expresamente recogidas en la Ley ¿es esta una causa suficiente para inadmitir un recurso? Quizás nos encontramos ante un exceso de formalismo puesto que es evidente que si la parte recurrente, en su explicación sobre la concurrencia del interés casacional, tras haber lamentado una serie de infracciones y haberlas subsumidas bajo algunos de los supuestos reglados, en relación con otras en cambio no hace expresamente referencia a ninguna de las circunstancias regladas parece quedar clara su intención de amparar su recurso en las “otras circunstancias” que la Ley permite invocar.

Es un principio general del derecho el que afirma que *Iura novit Curia* y, por lo tanto, pese a que la parte no lo haya hecho expresamente, es posible por parte del Tribunal

---

<sup>77</sup> ATS 2061/2017 apartado 3.1 RJ tercero.

aplicar en todo caso lo dispuesto por la LJCA.

Téngase en cuenta, además, que el artículo 89.2 f) solo prevé que la parte ha de fundamentar con singular referencia al caso, la concurrencia de alguno o algunos de los supuestos del artículo 88.2 y 3 que permitan la apreciación del interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala del TS.

En dicho precepto no se hace ninguna referencia al hecho que la parte tenga que afirmar expresamente la presencia de las “otras circunstancias” y, en efecto, parece lógico y evidente que esto se pueda ágilmente revelar a la hora de analizar la motivación que la parte aduce sobre la existencia del interés casacional.

Es más, llama la atención que el mismo Tribunal en el auto mencionado afirme que no sustentándose dicho interés en ninguna de las circunstancias del apartado 2, ni de las presunciones del apartado 3, se sobreentiende y sea lógico que se fundamenta en otras circunstancias distintas. Ahora bien, es esto un hecho que se sobreentiende y que por lo tanto es evidente para el Tribunal, pero pese a todo esto, se decide inadmitir el recurso porque el recurrente incumple el deber especial que el artículo 89.2 f) le impone.

Una interpretación demasiado estricta de lo dispuesto ex artículo 89.2 f) llevaría a consecuencias absurdas: por ejemplo, si el recurrente en su escrito dice y fundamenta que una sentencia fija ante cuestiones sustancialmente iguales una interpretación de normas de Derecho Estatal, en las que se fundamenta el fallo, que contradiga la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido, pero no afirma expresamente que esta vulneración haya de reconducirse al supuesto recogido en el artículo 88.2 a), ¿sería esta una causa suficiente en la que fundamentar la inadmisión?

Por muy formalista que nos pueda parecer, la respuesta es afirmativa, toda vez que el recurso a las circunstancias de interés casacional objetivo no expresamente previstas, ha de considerarse como una posibilidad excepcional.

Esta postura se ha mantenido, entre muchos, otros en los AATS 02/4/2018 (RC 5956/2017), 7/5/2018 (RQ 738/2017); y 26/11/2018 (RQ 397/2018), y en el reciente ATS de 15 de febrero de 2019 (RQ 22/2019), indicándose que:

*“Invoca también la parte recurrente el carácter de “numerus apertus” de la enunciación de los supuestos de interés casacional del artículo 88.2 tantas veces mencionado; pero esta Sala y Sección ha dicho con reiteración que la invocación de circunstancias de interés casacional no expresamente contempladas en los apartados 2º y 3º del artículo 88 es una posibilidad excepcional, por lo que su alegación exige del recurrente que en el escrito de preparación justifique cuidada y rigurosamente el interés casacional objetivo del recurso que revela la circunstancia invocada (que lógicamente no habrá de ser reconducible a alguna de las circunstancias del apartado 2º o de las presunciones del apartado 3º del propio artículo 88). Esto no lo ha hecho la parte aquí recurrente, que al anunciar el recurso ni siquiera aludió a una posible circunstancia suprallegal de interés casacional, y es ahora, en queja, cuando por primera vez se refiere a ella.”*

Y ello, nos lleva al otro requisito que el TS considera imprescindible a la hora de hacer valer una de las “otras circunstancias” no recogidas en la Ley, es decir, será imprescindible en todo caso, justificar “cuidada y rigurosamente el interés casacional objetivo del recurso que revela la circunstancia invocada”.

Ahora bien, en ninguno de los Autos que se han podido analizar, se expresa con claridad lo que ha de entenderse por “cuidada y rigurosamente”, dejándolo un poco al arbitrio de las partes. Llama la atención, no obstante que el TS por un lado diga que haya de ser cuidadosos y rigurosos y por otro lado imponga unos límites muy estrictos en relación con los escritos de preparación e interposición: no ha de superar las 15 paginas el primero, ni las 25 el segundo.

Es decir, hay que justificar todo cuidada y rigurosamente, pero a la vez hay que ser sintéticos y respetar los límites so pena de inadmisión. Es cierto, *semel in anno licet insanire*.

## **7. CONCLUSIONES.**

La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifican tanto la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial como la sección tercera del capítulo III del título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha puesto en marcha un nuevo modelo que pocos elementos comparte con el recurso de casación contencioso administrativo que existía

antes de la reforma.

Considerando el elevado número de asuntos que hace décadas llegaba al Tribunal Supremo, no cabe duda de que la finalidad principal de todas las reformas del recurso de casación llevadas a cabo hasta ahora ha sido reducir el número de asuntos con acceso a la casación. Precisamente por esta razón se optó por elevar sucesivamente la cuantía mínima de los asuntos que podían acceder a la casación contencioso-administrativa, hasta llegar a alcanzar la cuantía de 600.000 euros exigida antes de la entrada en vigor del nuevo modelo a modo de barrera de entrada.

La introducción de un límite económico, si bien *de facto* limitaba el número de asuntos con acceso a la casación, por otra parte, no permitía hacer una selección de los asuntos en base a su verdadero interés jurídico.

Con el nuevo sistema casacional, se pretende reforzar hasta su máxima expresión la función nomofiláctica del recurso de casación con el fin de asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. Para ello la reforma elimina la cuantía mínima exigida para poder recurrir una resolución en casación y amplía teóricamente el número de resoluciones que se pueden recurrir.

Decimos “teóricamente”, porque tampoco hay que olvidarse de que solo serán admitidos ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo admitir solamente aquellos recursos en los que concurre el “*interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia*”.

La finalidad de esta discrecionalidad atribuida al Alto Tribunal es preservar en todo momento el equilibrio existente entre la función homogeneizadora en la aplicación del derecho y el riesgo de que el recurso de casación se convierta en una tercera instancia. Por otra parte, si bien en general la labor del Tribunal Supremo ha impedido el acceso a la casación de recursos sin interés alguno para la formación de Jurisprudencia, desafortunadamente, también debe constatar que la discrecionalidad no siempre ha sido utilizada con acierto, como demuestran algunos de los Autos de inadmisión que se han analizado en el presente trabajo.



Además, las condiciones extrínsecas adoptadas a través de Acuerdo por el Alto Tribunal parecen abrir la vía a un excesivo formalismo, toda vez que la falta de respecto de las mismas pueda incluso llegar a ser causa de inadmisión del recurso, si bien, como se ha dicho, el TS ha matizado el alcance del Acuerdo mencionado.

Tampoco pasa inadvertida la influencia que la reforma de la casación tiene sobre la actividad de los profesionales del derecho, requiriéndoles diligencia y pericia en el cumplimiento de todas las exigencias formales y sustantivas necesarias para conseguir la admisión del recurso.

El nuevo recurso de casación contencioso- administrativo va entonces encaminado al potenciamiento de la función nomofiláctica atribuida al Alto Tribunal aunque ello no implica llegar hasta el extremo de prescindir de la base fáctica de la contienda, pues la perseguida finalidad de formación de jurisprudencia ha de considerarse en todo caso en relación con la resolución de las cuestiones suscitadas en el pleito que fueron objeto del pronunciamiento en la sentencia o debieran haberlo sido, es decir, no se trata de fomentar el *Ius Constitutionis* puro y duro. Como mantiene LÓPEZ MENUDO<sup>78</sup>, la función de hacer justicia atribuida al Tribunal Supremo, no debe quedar relegada a un segundo plano.

Tras la reforma, también se ha potenciado la implicación del órgano judicial *a quo*, autor de la resolución impugnada, ya que se fortalece su colaboración en la admisión del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, otorgándole la facultad de exponer razonadamente su opinión acerca de la presencia del mencionado interés casacional objetivo.

Desde la implantación del nuevo modelo, ha sido esencial la labor de desarrollo y explicación de los supuestos que permiten apreciar la existencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Lo que se auspicia es que se consiga alcanzar un equilibrio entre el formalismo requerido a las partes que pretenden recurrir en casación y la efectiva existencia de interés

---

<sup>78</sup> López Menudo, F., El recurso de casación ¿Jurisprudencia o Justicia?, Revista de Administración Pública n° 207 septiembre – diciembre 2018, pp. 24-25.

casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia que, como demuestran algunos de los autos que se han analizado, en la actualidad aún no se ha alcanzado.

No puede olvidarse, en efecto, que la primaria función del Tribunal Supremo es la de defender la uniforme aplicación del derecho, o, como decíamos al principio, de “proteger el ordenamiento jurídico”.

## **8. BIBLIOGRAFÍA.**

- FERNÁNDEZ, T.-R., Una reflexión necesaria sobre una experiencia todavía corta., Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 119 – 124.
- HUERTA GARICANO, I., Los criterios de la Sección de Admisión en orden a la admisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 61- 93.
- LÓPEZ MENUDO, F., El recurso de casación: ¿jurisprudencia y/o justicia?, Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 13- 41.
- MARTÍN REBOLLO L., Leyes Administrativas 22ª Edición 2016, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2016.
- NAVARRO VEGA M.B., Recientes Reformas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Tirant lo blanch, Valencia, 2017.
- PIÑAR MAÑAS, J.L. “Sobre la extensión máxima de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera del TS”. En Abogacía Española, 26 de mayo de 2016.
- SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Una primera aproximación al nuevo sistema casacional, Revista de Administración Pública n. 198 septiembre- diciembre 2015, Madrid.
- SANTAMARÍA PASTOR, J.A., La orientación legal acerca del interés casacional: excesos y defectos del artículo 88, Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 43- 59.
- TOLEDANO CANTERO, R., Las primeras sentencias de la nueva casación, Revista de Administración Pública, n. 207 septiembre – diciembre 2018, Madrid, pp. 95 – 118.

- VELASCO CABALLERO, F., Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa, Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), núm. 182 enero-marzo de 2017, Pamplona.

## **MARCO NORMATIVO.**

- Constitución Española
- L.O. 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Publicada en el B.O.E. n. 174 de 22 de julio de 2015.
- L.O. 6/2007, de 24 de mayo por la que se modifica la L.O. 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. BOE núm. 125, de 25 de mayo de 2007 pp. 22541 a 22547.
- Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. (Para la redacción de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la reforma de 2015, véase el B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998. Para la redacción de la misma tras la reforma véase el B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998 en su versión actualizada y consolidada).
- Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal. BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011, páginas 106726 a 106744.
- Acuerdo de 2ª Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de abril de 2016, Publicado en el B.O.E. núm.162 de 2 de julio de 2016.
- Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2016, publicado en el B.O.E. núm.163 de 7 de julio p. 47747.
- Informe explicativo y propuesta de anteproyecto de la Ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso administrativa Publicado en Marzo de 2013 por el Ministerio de Justicia.

## **SENTENCIAS Y AUTOS.**

- STS 5183/2001 ( sección 4) de 18 de junio de 2001, n. Recurso 1500/1997 FD.
- STC 121/1999, de 28 de junio. Recurso de Amparo n. 2017/1996.
- STC (Pleno) núm. 155/2009 de 25 de junio n. Recurso 7329/2008.
- STEDH de 20 de enero de 2015, demanda núm. 16363/11.

ATS 1591/2017, de 8 de febrero de 2017 n. Recurso: 153/2016.  
ATS 2705/2017 de 1 de marzo de 2017, n. Recurso: 2990/2016.  
ATS 2092/2017 de 15 de febrero, n. Recurso: 158/2016.  
ATS 1331/2017 de 1 de febrero n. Recurso 98/2016.  
ATS 2731/2017 de 15 de marzo, n. Recurso 56/2017.  
ATS 2723/2017 de 15 de marzo de 2017 n. Recurso 26/2017.  
ATS 1802/2017 de 8 de marzo de 2017 n. Recurso 40/2017.  
ATS 274/2017 de 25 de enero de 2017, n. Recurso 15/2016.  
ATS 2592/2017 de 29 de marzo de 2017, n. Recurso 256/2017.  
ATS 6140/2017 de 19 de junio de 2017, n. Recurso 1476/2017.  
ATS 7313/2017 de 10 de julio de 2017, n. Recurso 1249/2017.  
ATS 5031/2017 de 31 de mayo de 2017, n. Recurso 1528/2017.  
ATS 1945/2017 de 6 de marzo de 2017, n. Recurso 246/2016.  
ATS 5480/2017 de 31 de mayo de 2017 n. Recurso 973/2017.  
ATS 2121/2017 de 22 de marzo de 2017, n. Recurso 218/2016.  
ATS 2061/2017 de 15 de marzo de 2017, n. Recurso 91/2017.  
ATS 13/11/2017, Recurso de Queja n. 445/2017.  
ATS 16/5/2018, Recurso de Queja n. 589/2017.  
ATS 25/4/ 2019, Recurso de Queja n. 135/2019.  
ATS 26/4/2017, Recurso de Queja n. 177/2017.  
ATS 13/11/2017, Recurso de Queja n. 558/2017.  
ATS 2/11/2018, Recurso de Queja n. 193/2018.  
ATS 30/05/ 2017, Recurso de Casación n. 265/2017.  
ATS de 17/11/2016, Recurso de Queja n. 79/2016.  
ATS 1/12/2016, Recursos de Queja n. 80/2016 y 81/2016.  
ATS 15/12/2016, Recurso de Queja n. 97/2016.  
ATS 24/5/2017, Recurso de Queja n. 151/2016.  
ATS 3/5/2017, Recurso de Queja n. 2952/2016.  
ATS 5/10/2017, Recurso de Queja n. 470/2017.  
ATS 12/12/2017, Recurso de Queja n. 507/2017.  
ATS 3/10/2018, Recurso de Queja n. 346/2018.  
ATS 8/01/2019, Recurso de Queja n. 365/2018.  
ATS 7/02/2017, Recurso de Casación n. 161/2016:  
ATS 17/01/2019, Recurso de Casación n. 694/2018,

ATS 30/10/2017, Recurso de Casación n. 3666/2017.

ATS 8/3/2017, Recurso de Casación n. 40/2017.

ATS 1/02/2017, Recurso de Casación n. 31/2016.

ATS 25/05/2017, Recurso de Casación n. 1132/2017.

ATS 26/9/2018, Recurso de Queja n. 238/2018.

ATS 19/11/2018, Recurso de Queja n. 243/2018.

ATS 12/04/2019, Recurso de Queja n. 83/2019.

ATS 02/4/2018, Recurso de Casación n. 5956/2017.

ATS 7/5/2018, Recurso de Queja n. 738/2017.

ATS 26/11/2018, Recurso de Queja n. 397/2018.

ATS 15/02/2019, Recurso de Queja n. 22/2019.

## **PÁGINAS WEB CONSULTADAS.**

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Jurisprudencia/>

consultada reiteradamente, la última en fecha 1 de abril de 2020.

[http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder\\_Judicial/Tribunal\\_Supremo](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo)

consultada reiteradamente, la última en fecha 30 de marzo de 2020.

[http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/20.\\_documento\\_de\\_trabajo\\_t.s\\_2016\\_documento\\_no\\_20.pdf](http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/20._documento_de_trabajo_t.s_2016_documento_no_20.pdf)

consultada en fecha 1 de abril de 2020.

[https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/13/legal/1499946738\\_359271.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/13/legal/1499946738_359271.html)

consultada en fecha 10 de marzo de 2020.

<http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12154-el-ts-dicta-la-primer-sentencia-del-nuevo-recurso-de-casacion-en-menos-de-un-ano/>

consultada en fecha 2 de enero de 2020.

## **9. ABREVIATURAS.**

AN: Audiencia Nacional.

ATS; Auto del Tribunal Supremo.

LJCA: Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

L.O.: Ley Orgánica.

LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial.

TC: Tribunal Constitucional.

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

TS: Tribunal Supremo.

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.

SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

## 10. ANEXOS.

Para agilizar la lectura, a continuación se ofrecen tanto la redacción de los artículos de la LJCA relativos al recurso de casación anterior a la reforma llevada a cabo por la L.O. 7/2015, como su redacción actual.

### *REDACCIÓN ANTERIOR*

#### *Artículo 86*

*1. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.*

*2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior:*

*a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.*

*b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.*

*c) Las dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión a que se refiere el artículo 122.*

*d) Las dictadas en materia electoral.*

*3. Cabrá en todo caso recurso de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposición de carácter general.*

*4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo*

*serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.*

*5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.*

#### *Artículo 87*

*1. También son susceptibles de recurso de casación, en los mismos supuestos previstos en el artículo anterior, los autos siguientes:*

- a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.*
- b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.*
- c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.*
- d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.*

*2. Serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, los autos dictados en aplicación de los artículos 110 y 111.*

*3. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en los apartados anteriores, es requisito necesario interponer previamente el recurso de reposición.*

#### *Artículo 88*

*1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:*

- a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.*
- b) Incompetencia o inadecuación del procedimiento.*
- c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.*
- d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.*

*2. La infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.*

*3. Cuando el recurso se funde en el motivo previsto en la letra d) del apartado 1 de este artículo, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por éste, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.*

#### *Artículo 89*

1. *El recurso de casación se preparará ante la Sala que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.*
2. *En el supuesto previsto en el artículo 86.4, habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.*
3. *El recurso de casación podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida.*
4. *Transcurrido el plazo de diez días sin haberse preparado el recurso de casación, la sentencia o resolución quedará firme, declarándolo así el Secretario judicial mediante decreto.*

#### Artículo 90

1. *Si el escrito de preparación cumple los requisitos previstos en el artículo anterior, y se refiere a una resolución susceptible de casación, el Secretario judicial tendrá por preparado el recurso. En otro caso, dará cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda.*  
*Si se tuviere por preparado el recurso, el Secretario judicial emplazará a las partes para su comparecencia e interposición del recurso dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los emplazamientos, remitirá los autos originales y el expediente administrativo dentro de los cinco días siguientes.*
2. *Si no se tuviese por preparado, la Sala dictará auto motivado denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.*
3. *Contra la resolución en la que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento.*

#### Artículo 91

1. *La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.*
2. *La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2.*
3. *El Juez o Tribunal denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.*
4. *Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Secretario judicial dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo.*

#### Artículo 92



1. Dentro del término del emplazamiento, el recurrente habrá de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposición del recurso, en el que se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Secretario judicial declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieren.
3. Si el recurrente fuere el defensor de la Administración o el Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos se dictará diligencia de ordenación dándoles traslado de los mismos por plazo de treinta días para que manifiesten si sostienen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito de interposición ajustado a lo que previene el apartado 1 de este artículo.
4. Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito de interposición en el plazo antes señalado, se declarará desierto por el Secretario judicial.

#### Artículo 93

1. Interpuesto el recurso de casación, el Secretario judicial pasará las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso interpuesto
2. La Sala dictará auto de inadmisión en los siguientes casos:
  - a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciase en este trámite que no se han observado los requisitos exigidos o que la resolución impugnada no es susceptible de recurso de casación. A estos efectos, la Sala podrá rectificar fundadamente la cuantía inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si ésta lo solicita dentro del término del emplazamiento.
  - b) Si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposición del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el artículo 88; si no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas; si las citas hechas no guardan relación alguna con las cuestiones debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la subsanación de la falta, no hay constancia de que se haya hecho.
  - c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.
  - d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.
  - e) En los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.
3. La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas por plazo de diez días para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.
4. Si la Sala considera que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto motivado declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si la inadmisión no fuera de todos los motivos aducidos, dictará también auto motivado, continuando la tramitación del recurso respecto de los motivos no afectados por el auto de inadmisión parcial. Para declarar la inadmisión del recurso por cualquiera de las causas previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2, será necesario que el auto se dicte por unanimidad.

5. La inadmisión del recurso, cuando sea total, comportará la imposición de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apartado 2.

6. Contra los autos a que se refiere este artículo no se dará recurso alguno.

#### Artículo 94

1. De admitirse el recurso por todos o alguno de sus motivos, el Secretario judicial entregará copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo común de treinta días. Durante dicho plazo estarán de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial.

En el escrito de oposición se podrán alegar causas de inadmisibilidad del recurso, siempre que no hayan sido rechazadas por el Tribunal en el trámite establecido en el artículo 93.

2. Transcurrido el plazo, háyanse o no presentado escritos de oposición, el Secretario judicial señalará día y hora para celebración de la vista de acordarlo así la Sala o, de no ser así, declarará que el pleito está concluso para sentencia.

3. Habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario, atendida la índole del asunto. La solicitud de vista se formulará por otrosí en los escritos de interposición del recurso y de oposición a éste.

4. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista o la declaración de que el pleito está concluso para sentencia.

#### Artículo 95

1. La sentencia que resuelva el recurso de casación podrá declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los motivos previstos en el artículo 93.2.

2. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolverá conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) De estimarse por el motivo del artículo 88.1.a), se anulará la sentencia o resolución recurrida, indicándose el concreto orden jurisdiccional que se estima competente o se resolverá el asunto, según corresponda.

En el primer caso, será aplicable lo dispuesto en el artículo 5.3.

b) De estimarse por el motivo del artículo 88.1.b), se remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional competente para que resuelva, o se repondrán al estado y momento exigidos por el procedimiento adecuado para la sustanciación de las mismas, salvo que, por la aplicación de sus normas específicas, dicho procedimiento adecuado no pueda seguirse.

c) De estimarse la existencia de las infracciones procesales mencionadas en el motivo del artículo 88.1.c), se mandarán reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infracción consistiera en vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la siguiente letra d).

d) En los demás casos, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

3. En la sentencia que declare haber lugar al recurso, la Sala resolverá en cuanto a las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.

## RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA

### Artículo 96

1. *Podrá interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.*
2. *También son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia cuando la contradicción se produzca con sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior.*
3. *Sólo serán susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra b) del artículo 86.2, siempre que la cuantía litigiosa sea superior a 30.000 euros.*
4. *En ningún caso serán recurribles las sentencias a que se refiere el artículo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan excluidas del recurso de casación en el artículo 86.4.*
5. *Del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en este artículo conocerá, dentro de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Sección que corresponda de acuerdo con las reglas generales de organización de la misma Sala.*
6. *Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dictadas en única instancia por el Tribunal Supremo, del recurso conocerá una Sección compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos.*
7. *De este recurso conocerá la Sección a que se refiere el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Supremo que se cite como infringida provenga, y se haga constar así por el recurrente en el escrito de preparación, de una Sección distinta de aquélla a la que corresponda conocer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.*

### Artículo 97

1. *El recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá directamente ante la Sala sentenciadora en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia, mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.*
2. *A este escrito se acompañará certificación de la sentencia o sentencias alegadas con mención de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificación documental de haberse solicitado aquélla, en cuyo caso el Secretario judicial la reclamará de oficio. Si la sentencia ha sido publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2, bastará con indicar el periódico oficial en el que aparezca publicada*

3. Si el escrito de interposición cumple los requisitos previstos en los apartados anteriores y se refiere a una sentencia susceptible de casación para la unificación de la doctrina, el Secretario judicial admitirá el recurso. En otro caso, dará cuenta a la Sala para que resuelva lo que proceda.

Admitido el recurso, el Secretario judicial dará traslado del mismo, con entrega de copia, a la parte o partes recurridas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo de treinta días, quedando entretanto de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial. El traslado del recurso a la parte o partes recurridas exigirá, en su caso, que previamente se haya traído a los autos la certificación reclamada.

4. Si no se admitiese el recurso se dictará auto motivado, pero antes de resolver la Sala pondrá de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisión a las partes, en el plazo común de cinco días, para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de inadmisión podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. En los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo podrán las partes pedir la celebración de vista.

6. Presentado el escrito o escritos de oposición al recurso, o transcurrido el plazo para ello, la Sala sentenciadora elevará los autos y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días.

7. La sustanciación y resolución del recurso de casación para la unificación de doctrina, en todo lo no previsto en los artículos anteriores, se acomodará a lo establecido en la Sección anterior en cuanto resulte aplicable.

#### Artículo 98

1. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.

2. Si la sentencia declara que ha lugar al recurso, casará la impugnada y resolverá el debate planteado con pronunciamientos ajustados a Derecho, modificando las declaraciones efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia recurrida.

#### Artículo 99

1. Son susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso sólo podrá fundarse en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

2. Este recurso únicamente procederá contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casación o de recurso de casación para la unificación de doctrina por aplicación exclusiva de lo previsto en el artículo 86.4 y cuando la cuantía litigiosa supere los 30.000 euros.

3. *Del recurso de casación para la unificación de doctrina conocerá una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.*

*Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.*

4. *En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciación de este recurso y efectos de la sentencia regirá lo establecido en los artículos 97 y 98 con las adaptaciones necesarias.*

#### RECURSO DE CASACIÓN EN INTERÉS DE LA LEY

##### Artículo 100

1. *Las sentencias dictadas en única instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo y las pronunciadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, que no sean susceptibles de los recursos de casación a que se refieren las dos Secciones anteriores, podrán ser impugnadas por la Administración pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administración General del Estado, en interés de la Ley, mediante un recurso de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada.*

2. *Únicamente podrá enjuiciarse a través de este recurso la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido.*

3. *El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que se postule, acompañando copia certificada de la sentencia impugnada en la que deberá constar la fecha de su notificación. Si no se cumplen estos requisitos o el recurso fuera extemporáneo, la Sala ordenará de plano su archivo.*

4. *Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial del Tribunal Supremo reclamará los autos originales al órgano jurisdiccional sentenciador y mandará emplazar a cuantos hubiesen sido parte en los mismos, para que en el plazo de quince días comparezcan en el recurso.* 5. *Del escrito de interposición del recurso el Secretario dará traslado, con entrega de copia, a las partes personadas para que en el plazo de treinta días formulen las alegaciones que estimen procedentes, poniéndoles entretanto de manifiesto las actuaciones en la Oficina judicial. Este traslado se entenderá siempre con el defensor de la Administración cuando no fuere recurrente.*

6. Transcurrido el plazo de alegaciones, háyanse o no presentado escritos, y previa audiencia del Ministerio Fiscal por plazo de diez días, el Tribunal Supremo dictará sentencia. A la tramitación y resolución de estos recursos se dará carácter preferente.

7. La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional

#### Artículo 101

1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo contra las que no se puede interponer el recurso previsto en el artículo anterior podrán ser impugnadas por la Administración pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administración de la Comunidad Autónoma, en interés de la Ley, mediante un recurso de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada.

2. Únicamente podrá enjuiciarse a través de este recurso la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas de la Comunidad Autónoma que hayan sido determinantes del fallo recurrido.

3. De este recurso de casación en interés de la Ley conocerá la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia y, cuando cuente con más de una, la Sección de la Sala que tenga su sede en dicho Tribunal a que se refiere el artículo 99.3.

4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciación de este recurso y efectos de la sentencia regirá lo establecido en el artículo anterior con las adaptaciones necesarias. La publicación de la sentencia, en su caso, tendrá lugar en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces de lo Contencioso-administrativo con sede en el territorio a que extiende su jurisdicción el Tribunal Superior de Justicia.

#### REDACCIÓN ACTUAL

#### Artículo 86.

1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.

3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

#### Artículo 87.

1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual límite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior:

- a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
- b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.
- c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
- d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.
- e) Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111.

2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica(\*).

#### Artículo 87 bis.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.

2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la

*resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate.*

*3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.*

#### *Artículo 88.*

*1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.*

*2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:*

*a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.*

*b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.*

*c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.*

*d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.*

*e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.*

*f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.*

*g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.*

*h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.*

*i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.*

*3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:*

*a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.*

*b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.*

*c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.*

*d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.*



*e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.*

*No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.*

#### *Artículo 89.*

*1. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.*

*2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:*

*a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna.*

*b) Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.*

*c) Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.*

*d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir.*

*e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.*

*f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.*

*3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley.*

*4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

*5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo*

*Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión.*

*6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento.*

#### *Artículo 90.*

*1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.*

*2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepción del Presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial.*

*3. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma:*

*a) En los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado.*

*b) En los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquél se establecen.*

*4. Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias:*

*a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada;*

*b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación;*

*c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o*

*d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.*

*5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.*

6. El Letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.

7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo hará público, en la mencionada página web y en el «Boletín Oficial del Estado», el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.

8. La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.

#### Artículo 91.

1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2 de esta Ley.

3. El Tribunal de instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.

4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Letrado de la Administración de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo.

#### Artículo 92.

1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la Secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la Oficina judicial.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaración sólo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta Ley.

3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces,

*debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y*

*b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.*

*4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.*

*5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.*

*6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sección competente para la decisión del recurso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes formulada por otrosí en los escritos de interposición u oposición, acordará la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer.*

*7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.*

*8. La Sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.*

### *Artículo 93.*

*1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación.*

*2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el órgano judicial de instancia, anulará la resolución recurrida e indicará, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prevé el artículo 5.3 de esta Ley, o remitirá, en el segundo, las actuaciones al órgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.*

*3. En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.*

*4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta Ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.*